



Nicaragua: caminos hacia el diálogo después de la revuelta aplastada

Informe sobre América Latina N°72 | 19 de diciembre de 2018

Traducido del inglés

Headquarters

International Crisis Group

Avenue Louise 149 • 1050 Brussels, Belgium

Tel: +32 2 502 90 38 • Fax: +32 2 502 50 38

brussels@crisisgroup.org

Preventing War. Shaping Peace.

Tabla de contenidos

Resumen ejecutivo	i
I. Introducción	1
II. El aparato de poder de Ortega.....	3
A. Los cimientos del Sandinismo moderno	3
B. Alianzas estratégicas	6
III. Revuelta, diálogo y repercusiones de la crisis de abril de 2018.....	8
A. La revuelta del 18 de abril.....	8
B. Violencia armada y violaciones de los derechos humanos.....	10
C. El fracaso del diálogo	13
D. Crisis económica	17
IV. Perspectivas de diálogo y reforma.....	19
A. Incentivos para reanudar las negociaciones.....	19
B. Compromiso y presión internacional	21
C. Reforma electoral.....	24
D. Justicia y derechos humanos	26
V. Conclusión	28
ANEXOS	
A. Mapa de América Central.....	30
B. Mapa de Nicaragua.....	31
C. Economía de Nicaragua.....	32
D. Tasas de homicidios en países de América Central.....	34
E. Financiamiento de Venezuela para el desarrollo en Nicaragua.....	35
F. Acerca de International Crisis Group.....	36
G. Informes e Informes Breves de Crisis Group sobre América Latina desde 2015	37
H. Consejo de Administración de Crisis Group	38

Conclusiones principales

¿Qué hay de nuevo? El presidente nicaragüense Daniel Ortega ha sofocado un levantamiento cívico mediante la violencia, la intimidación y el enjuiciamiento de manifestantes sin las debidas garantías procesales. Más de 300 personas murieron en enfrentamientos entre manifestantes, policía y grupos parapoliciales. Desde entonces, la intensidad de las protestas se ha reducido y muchos opositores han huido al exilio. Las negociaciones entre las partes colapsaron tras un fallido intento de diálogo.

¿Por qué importa? La probabilidad de que surjan nuevos disturbios va en aumento debido al acelerado deterioro económico, el distanciamiento del gobierno de sus antiguos aliados en la Iglesia católica y el sector privado, así como por el descontento social cada vez más amplio debido a la represión gubernamental. Las protestas continuarán, a no ser que el gobierno indique que está preparado para abordar al menos algunas de las demandas de los manifestantes.

¿Qué se debería hacer? El hecho de que Ortega haya recuperado el control de las calles y que la oposición demuestre falta de liderazgo dificultan la reanudación de las negociaciones. No obstante, las presiones diplomáticas sobre Ortega por parte de EE.UU., la UE, el Vaticano y países de América Latina podrían llevar al gobierno a acceder a ciertas reformas electorales, lo cual demostraría su voluntad de compromiso y allanaría el camino para un futuro diálogo.

Resumen ejecutivo

Nicaragua sufrió un inesperado y devastador revés este año, a pesar de que el gobierno llevaba más de una década presentando al país como un “oasis de paz” en medio de una Centroamérica excepcionalmente violenta. En abril de 2018, miles de manifestantes tomaron las calles enfurecidos por el anuncio de reformas a la seguridad social. Las protestas fueron brutalmente reprimidas por parte de las fuerzas de seguridad y los parapolicias, dejando al menos 300 muertos, la mayoría manifestantes. Tras meses de revueltas, enfrentamientos y detenciones masivas, el presidente Daniel Ortega restableció el control de las calles en julio haciendo uso de su capacidad represora, el control de las instituciones estatales y el apoyo de organizaciones de base. Las penurias económicas, la incesante hostilidad política, así como la desafección de los antiguos aliados del gobierno podrían dar lugar a nuevos disturbios. Para evitar que esto suceda, el presidente Ortega debería acceder a ciertas reformas electorales y garantizar el debido proceso de los manifestantes detenidos. Los países de la región, la UE, EE.UU. y el Vaticano deberían, por el momento, evitar imponer nuevas sanciones y presionar al gobierno para que se comprometa con estas reformas como paso previo a un nuevo diálogo.

Ortega culpa al golpismo estadounidense y a células terroristas locales del levantamiento de abril a la vez que resucita la retórica de los 80, cuando los sandinistas enfrentaron un movimiento insurgente financiado por EE.UU. Sus opositores en las universidades, el sector privado, el movimiento campesino y la sociedad civil denuncian la erosión de la democracia desde que Ortega fue reelegido en 2006, un proceso que culminó recientemente en una especie de régimen dinástico unipartidista al instalar a su esposa, Rosario Murillo, como su vicepresidenta y heredera política. Pero Ortega y Murillo, que pese a la represión violenta aún cuentan con el apoyo de casi un tercio de la población, se niegan a hacer concesiones alegando un intento de golpe de Estado por parte de la oposición, formada al calor de las protestas, la cual aún reclama que ambos abandonen el cargo y se vayan al exilio. El intento de negociaciones entre gobierno y manifestantes se fue desmoronando a medida que las fuerzas de seguridad restablecieron el control de las calles en julio, llevando a muchos de los líderes de las marchas a enfrentar detenciones, juicios, o su salida inminente del país.

Aunque muchos se muestran críticos con Ortega, no es tan evidente quién representa realmente la oposición al presidente. El ecléctico movimiento opositor que nació de las manifestaciones no cuenta con liderazgos claros, mientras que los partidos políticos opositores están debilitados tras años de limitación de sus capacidades por parte del partido de gobierno. Incluso si Ortega accediera a retomar el diálogo, lo cual parece poco probable, sigue siendo una incógnita quién sería su contraparte en una eventual negociación. Mientras tanto, el gobierno continúa ampliando sus competencias anti-terroristas para contener el movimiento y anunció la prohibición de las protestas. Recientemente, el sector empresarial también denunció un control estatal invasivo sobre sus negocios.

El gobierno nicaragüense ha pagado un alto coste por la represión. Retomar el control por la fuerza ha erosionado su apoyo popular. Quienes otrora fueron sus dos aliados clave en la última década, el sector privado y la Iglesia católica, le han dado la espalda. El impacto económico a largo plazo de la crisis ha sido devastador tanto para los sandinistas como para los empresarios, con un descenso estimado del 4 por ciento del PIB en 2018. Ortega también ha sufrido el desprestigio internacional después de que la mayoría de los líderes latinoamericanos y occidentales condenaran la represión del gobierno.

Aunque Washington haya impuesto sanciones, es muy poco probable que éstas alteren los cálculos en Managua dado que no van orientadas a que el gobierno haga concesiones concretas ni incluyen condiciones claras sobre qué tendría que ocurrir para que se levantaran. De hecho, Ortega ve estas sanciones como un fantasma de la Guerra Fría que EE.UU. está usando como estratagema para un cambio de régimen. La alusión a Nicaragua junto con Cuba y Venezuela por parte del gobierno estadounidense como la “troika de la tiranía” en América Latina no hace sino reforzar la versión de los sandinistas. Pero incluso si hay un declive económico, Ortega tiene varias opciones. El presidente podría contrarrestar la presión de Occidente apoyándose más en China y Rusia, o fomentar su apoyo por parte de las clases más populares haciéndolas depender más de los subsidios del gobierno en un eventual deterioro de la crisis.

Una diplomacia más silenciosa podría resultar más eficaz. El hecho de que Nicaragua se encuentre aislada en América Latina y que Ortega haya manifestado preocupación por la reputación del país en el extranjero sugiere que la aplicación cautelosa de influencia externa podría empujar al presidente a una posición más conciliadora. A la larga, estas interacciones permitirían crear las condiciones necesarias para un retorno al diálogo. El secretario general de la ONU António Guterres mantiene contactos con Ortega y podría designar un enviado para Nicaragua que facilite los esfuerzos de mediación; Vinicio Cerezo, el jefe del Sistema de la Integración Centroamericana, una organización subregional, también goza de la confianza de Ortega y podría desempeñar un papel de mediador.

Reiniciar el diálogo es fundamental para abordar las principales disputas entre el gobierno y la oposición, entre ellas obligar a rendir cuentas a los responsables de la represión y allanar el camino para reformas democráticas más ambiciosas. Los esfuerzos frustrados de negociación que tuvieron lugar entre mayo y julio son la mejor muestra de que un futuro diálogo no será fácil y que dependerá de una presión continua sobre el gobierno y de que la oposición establezca un liderazgo más firme y adecúe sus expectativas. Por ahora, es improbable que presionar para que haya un diálogo dé resultado, dada la resistencia del gobierno y la falta de cohesión y agenda en la oposición. No obstante, las potencias extranjeras deberían llamar al gobierno nicaragüense a:

- ❑ Volver a comprometerse con reformas electorales e implementarlas. Tanto la UE como la OEA han documentado los pasos necesarios para rehacer el sistema electoral, que incluyen cambios en la composición del Consejo Supremo Electoral. Hace años, Ortega ya había accedido a este tipo de medidas, que garantizarían que los próximos comicios presidenciales previstos para 2021 se celebren en igualdad de condiciones.

- Garantizar el debido proceso de las personas detenidas en los últimos meses. Si bien el gobierno ha expulsado a los observadores del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sigue activa y presente en el país.* El gobierno debería proporcionarle un listado completo de los nombres y ubicación de los manifestantes detenidos, cuyo número se estima en hasta 600, y garantizar juicios justos para los detenidos.

Tales medidas, que idealmente irían seguidas de la reanudación del diálogo con la oposición, indicarían un cierto compromiso por parte del presidente Ortega y reducirían el riesgo de nuevas protestas. Además, podrían ayudar a restaurar el prestigio internacional y el legado de los sandinistas. Para los opositores de Ortega, no tiene sentido pedir la salida del presidente o elecciones anticipadas. Tan improbable es que Ortega deje el poder voluntariamente como que la oposición política y los manifestantes estén preparados para hacer campaña política por el momento. Una estrategia más efectiva podría ser prepararse para unas elecciones, en teoría más justas, en 2021. Si surgiera la oportunidad, la oposición podría también reanudar las negociaciones sobre las profundas reformas judiciales que debería implementar la nueva legislatura que se elegirá dentro de tres años.

Ciudad de Guatemala/Bogotá/Bruselas, 19 de diciembre de 2018

** Unas horas tras la publicación de este informe, el gobierno de Nicaragua expulsó a la CIDH del país.*

Nicaragua: caminos hacia el diálogo después de la revuelta aplastada

I. Introducción

Si bien Nicaragua sigue siendo uno de los países más pobres de América Latina, hasta hace poco sus niveles de estabilidad y crecimiento económico sugerían que el país había superado el tumulto revolucionario al final de la Guerra Fría. Tras décadas de ocupación estadounidense seguida del apoyo de Washington al despotismo dinástico de la familia Somoza, en 1979 el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), un grupo guerrillero de izquierda, derrocó al dictador Anastasio Somoza Debayle y estableció un gobierno revolucionario bajo el liderazgo de Daniel Ortega¹. Tras conquistar el poder, durante una década los sandinistas impulsaron políticas sociales transformadoras, entre ellas una reforma agraria y una campaña de alfabetización masiva. Del mismo modo, también introdujeron el servicio militar obligatorio para luchar contra una insurgencia contrarrevolucionaria – conocida como “la Contra” – financiada y equipada por EE.UU.²

Después de perder las elecciones y ceder el poder en 1990, el presidente Ortega volvió al ejecutivo tras ganar los comicios en 2006. Desde entonces, ha establecido al FSLN como la fuerza política, social y económica dominante de Nicaragua. Mediante alianzas estratégicas con el sector privado, la Iglesia católica y los militares, Ortega logró un crecimiento elevado y sostenido a la vez que mantuvo las tasas de delincuencia más bajas de Centroamérica a pesar de la proximidad de Nicaragua a Honduras y El Salvador, dos de los países más violentos y azotados por el crimen en el hemisferio occidental³. La aparente estabilidad bajo el mando de Ortega –descrita como “un modelo de paz en el cementerio” – llevó a muchos gobiernos extranjeros y ciudadanos nicaragüenses a aceptar el nuevo orden, incluso mientras los sandinistas desmantelaban los controles y contrapesos constitucionales e imponían el control partidista sobre las instituciones públicas⁴.

¹ El FSLN fue fundado en Managua 1961 y consiguió el apoyo de estudiantes, trabajadores rurales, miembros de la Iglesia y opositores de Somoza para formar un movimiento guerrillero cuyo objetivo era derrocar a un régimen dictatorial caracterizado por su brutalidad, corrupción, indiferencia hacia los pobres y el respaldo de EE.UU. Tras unas negociaciones fallidas y varias ofensivas de la guerrilla, el 19 de julio de 1979 el FSLN tomó la capital y el presidente Somoza huyó del país. Baracco, L. *Nicaragua, Imagining The Nation: From 19th Century Liberals to 20th Century Sandinistas* (Nueva York, 2005), pp. 61-105.

² La administración Reagan financió clandestinamente la insurgencia de la “Contra” con recursos provenientes de la venta de armas a Irán, en el llamado escándalo Irán-Contra. “Report of the congressional committees investigating the Iran-Contra Affair”, Congreso de EE.UU., 1987.

³ Según datos policiales oficiales, la tasa de homicidios de Nicaragua en 2017 fue de 7 muertes violentas por cada 100 000 habitantes; ese mismo año, El Salvador y Honduras registraron tasas de 60 y 42,8 asesinatos por cada 100 000 habitantes respectivamente, la mayoría de ellos atribuidos a la violencia de las pandillas. “InSight Crime’s 2017 Homicide Round-Up”, Insight Crime, 19 de enero de 2017. Véase el anexo D.

⁴ Entrevista de Crisis Group, académico nicaragüense, Managua, 6 de septiembre de 2018.

Las marchas cívicas y espontáneas que comenzaron el 18 de abril cuando los nicaragüenses tomaron las calles para exigir la salida del presidente Ortega y el retorno de la democracia terminaron abruptamente con diez años de relativa calma social. Un ecléctico movimiento antigobierno formado por estudiantes, el sector privado, intelectuales y la sociedad civil se manifestó y levantó barricadas en un intento de convencer a Ortega de que renunciara y negociara reformas electorales y políticas. El gobierno, inicialmente sorprendido por la velocidad y la magnitud del levantamiento, posteriormente calificó el movimiento de “golpe” liderado por terroristas financiados por EE.UU.⁵. La respuesta oficial fue brutal. Los enfrentamientos entre los manifestantes antigobierno y las fuerzas de seguridad causaron cientos de muertos y miles de heridos. Los esfuerzos liderados por la Iglesia católica para llevar a las partes a la mesa de negociación no dieron fruto, y el gobierno los abandonó una vez que logró sofocar las protestas.

Este primer informe de Crisis Group sobre Nicaragua evalúa las consecuencias de la represión y los posibles caminos hacia una solución negociada, explorando los incentivos de ambas partes para entablar el diálogo y la posible participación de organismos internacionales como la ONU, la Unión Europea (UE) y la Organización de Estados Americanos (OEA). Está basado en docenas de entrevistas con diplomáticos, líderes religiosos, ex funcionarios, líderes cívicos, y grupos opositores, entre ellos organizaciones de estudiantes, entidades del sector privado, políticos en Nicaragua, Guatemala y EE.UU., y solicitantes de asilo nicaragüenses en Costa Rica, realizadas entre septiembre y octubre de 2018. Pese a numerosas peticiones, ningún funcionario del gobierno nicaragüense o miembro del FSLN accedió a hablar con Crisis Group. La perspectiva del gobierno se deriva del estudio de 31 discursos públicos, artículos y entrevistas con altos funcionarios del FSLN, así como entrevistas con ex funcionarios y figuras cercanas al gobierno.

⁵ “Presidente Daniel Ortega llama a tomar el camino de la paz”, El 19 Digital, 13 de julio de 2018.

II. El aparato de poder de Ortega

Durante más de diez años, el gobierno del presidente Ortega logró un crecimiento económico sostenido y bajas tasas de delincuencia. Sin embargo, esta aparente calma vino acompañada de un mayor control por parte del FSLN de los tribunales, de las instituciones electorales y gran parte de la vida pública. Esta mezcla de autoritarismo y desarrollo se debió en gran medida a alianzas estratégicas con el sector privado, la iglesia y los militares.

A. *Los cimientos del Sandinismo moderno*

La fragmentación de la oposición política en Nicaragua a principios de la década del 2000 allanó el camino para la vuelta al poder de Ortega. En 1999, cuando aún estaba en la oposición, Ortega firmó un pacto con el ex presidente Arnoldo Alemán, del derechista Partido Liberal Constitucionalista (PLC), que desde 1996 había liderado un gobierno plagado de escándalos de corrupción. A cambio de protección política y judicial, Alemán acordó con Ortega una serie de reformas electorales y judiciales destinadas a consolidar un sistema bipartidista dominado por el FSLN y los liberales de Alemán⁶. Los escándalos de corrupción y el pacto de 1999 dividieron al PLC en dos campos: los simpatizantes de Alemán, y los disidentes liberales liderados por Eduardo Montealegre. Ninguno de los dos pudo derrotar a Ortega en la primera ronda de las elecciones de 2006, que ganó con el 38 por ciento de los votos gracias a las reformas realizadas en el marco del pacto de 1999. De nuevo en el poder, Ortega y sus aliados en los tribunales maniobraron para bloquear y sabotear a los partidos de la oposición⁷.

Tras ganar las elecciones de 2011, la mayoría del FSLN en la Asamblea – a menudo descrita por la oposición como “la aplanadora sandinista” – aprobó un conjunto de leyes que eliminaban los límites a la reelección presidencial en 2014 y finalmente acabaron con la expulsión de 28 diputados del Partido Liberal Independiente (PLI). Esta última medida otorgó a los sandinistas pleno control de la Asamblea y neutralizó a gran parte de la oposición unos meses antes de las elecciones de 2016 al declarar ilegal la segunda fuerza política del país⁸.

⁶ El pacto “Ortega-Alemán” dividió la representación en la Corte Suprema, las autoridades electorales, y la Fiscalía General del país entre el FSLN y el partido de Alemán, limitando el acceso al poder de otros partidos. También incluyó una reforma electoral a medida para el beneficio del FSLN, que le permitiría ganar unas elecciones presidenciales si su candidato ganaba con el 35 por ciento o más de los votos en la primera ronda y una ventaja del 5 por ciento sobre el segundo candidato, cifras que coincidían con la base electoral tradicional del partido. “Política nacional sellada por el pacto”, *La Prensa*, 30 de diciembre de 2001.

⁷ La Corte Suprema Electoral impidió a los candidatos del Movimiento Renovador Sandinista (MRS) y el Partido Liberal Conservador (PLC) competir en elecciones de 2011. “Nicaragua: how was institutionality reformed to concentrate power?”, Center for Justice and International Law (CEJIL) report, junio de 2017, pp. 14-19.

⁸ En junio de 2016, cinco meses antes de las elecciones, las autoridades electorales de Nicaragua resolvieron una apelación presentada seis años antes en relación a disputas internas del Partido Liberal Independiente, lo que llevó a la destitución de Eduardo Montealegre como representante legal del partido. Sus 28 diputados fueron obligados a renunciar en julio de 2016 tras negarse a reconocer al nuevo líder del partido Pedro Eulogio Reyes Vallejos, considerado un aliado de Ortega. Entrevista

Con la oposición sumida en el caos y el control por parte de su partido y aliados en todas las ramas del Estado, Ortega, que en la actualidad tiene 73 años, procedió a consolidar una nueva dinastía política con el nombramiento de su esposa Rosario Murillo como su candidata a la vicepresidencia⁹. Murillo ha ido asumiendo cada vez más control a medida que la salud de Ortega se ha ido deteriorando; cada solicitud o declaración pública del gobierno nicaragüense debe ser enviada supuestamente a su correo electrónico, donde se acumulan miles de mensajes a la espera de su aprobación, según exfuncionarios. “Ella es la que gestiona el país”, dijo un exdiplomático¹⁰.

La propaganda del FSLN ha sido uno de los pilares de su influencia política. A excepción de la televisión por cable, la mayoría de los canales de televisión y la mitad de las estaciones de radio están controladas por los Ortega o por personas relacionadas con el FSLN, las cuales elogian los logros del gobierno¹¹. Los colores partidarios del FSLN, negro y rojo, a menudo se ven junto a la bandera nacional en instituciones como la Asamblea Nacional y el palacio presidencial. “En Nicaragua, hay una estructura híbrida entre [el FSLN] y el Estado”, dijo un experto en derechos humanos¹². Los planes de estudio en las escuelas en Nicaragua, cuya tasa de escolaridad está muy por encima del promedio en América Latina, alaban al presidente Ortega y al partido gobernante¹³.

La elevada tasa de pobreza de Nicaragua – la segunda más alta del hemisferio después de Haití – ha permitido a Ortega consolidar lealtades mediante el clientelismo¹⁴. Programas como “Hambre Cero” y la distribución de alimentos y viviendas por parte de activistas del FSLN y funcionarios municipales han garantizado al gobierno una sólida base social por todo el país. Los empleados públicos deben demostrar su fidelidad al partido, bajo amenaza de despido, asistiendo a manifestaciones a favor del gobierno o dando otras señales de apoyo¹⁵. “Si quieres hacer algo en Nicaragua, necesitas un carnet del FSLN”, dijo un sacerdote¹⁶.

de Crisis Group, ex diplomático nicaragüense, Ciudad de Guatemala, 17 de agosto de 2018. “El Consejo Electoral de Nicaragua destituye a 28 diputados opositores y refuerza el poder de Ortega”, AFP, 29 de julio de 2016. “Reforma que permite reelección presidencial en Nicaragua entrará en vigor el lunes”, *El Nuevo Herald*, 8 de febrero de 2014.

⁹ Muchos analistas señalan que la creciente influencia de Murillo se debe a un acuerdo tácito al que llegó con su marido después de apoyarlo cuando una de las hijas de un matrimonio anterior de Murillo lo acusara de abusos sexuales en 1998, una acusación que Ortega niega encarecidamente, y por la cual nunca fue juzgado. “Rosario Murillo, primera dama de Nicaragua y ariete de Daniel Ortega”, *El Mundo*, 23 de julio de 2018.

¹⁰ Entrevista de Crisis Group, ex diplomáticos nicaragüenses, Ciudad de Guatemala y Managua, 4 de septiembre de 2018.

¹¹ La mayoría de los nicaragüenses de zonas rurales no se pueden permitir la televisión por cable, por la que son transmitidos la mayoría de los canales no gubernamentales. Los canales del 2 al 13 en Nicaragua se consideran progubernamentales, excepto los canales 10 y 12, que pertenecen a otros grupos. Entrevista de Crisis Group, periodista, Managua, 6 de septiembre de 2018.

¹² Entrevista de Crisis Group, experto en derechos humanos, Managua, 6 de septiembre de 2018.

¹³ Tasas de escolaridad de la base de datos del Banco Mundial, cifras para Nicaragua, América Latina y el Caribe, disponibles en: <https://bit.ly/2PozcoN>. Entrevistas de Crisis Group, exiliados nicaragüenses, Ciudad de Guatemala, agosto de 2018.

¹⁴ Tasas de pobreza de la base de datos del Banco Mundial, disponible en: <https://bit.ly/2PozcoN>.

¹⁵ Después de la revuelta del 18 de abril, el FSLN envió una solicitud obligatoria a los empleados públicos para que proporcionaran información sobre todas sus cuentas en medios sociales. Entre-

Cuando lo consideró necesario, el gobierno también silenció a sus opositores mediante la represión. Un movimiento rural que se opuso a un plan para construir un canal financiado por China que competiría con el Canal de Panamá y un grupo de ex milicianos desmovilizados de la guerra de la Contra sufrieron el grueso de la violencia selectiva que llevaron a cabo la policía y unidades especiales del ejército¹⁷. Las organizaciones no alineadas con el gobierno sufrían un acoso constante: “recibimos facturas de la luz astronómicas, [los miembros del FSLN] boicotearon nuestras actividades... recibimos amenazas constantes”, explica una lideresa cívica¹⁸. Mediante el trabajo de inteligencia a nivel local a través de los Consejos de la Familia, la Comunidad y la Vida – anteriormente conocidos como Consejos de Poder Ciudadano (CPCs) – el gobierno ejercía el control social, a la vez que proporcionaba a las fuerzas de seguridad información de base sobre la delincuencia y monitoreaba a los supuestos opositores¹⁹.

Como resultado, Nicaragua bajo el gobierno de Ortega-Murillo ofrecía estabilidad y prosperidad. Pero esto trajo consigo un endurecimiento del control social y un retroceso democrático. Si bien algunas organizaciones internacionales planteaban inquietudes acerca del deterioro de los derechos humanos, la mayoría de los organismos internacionales celebraban el crecimiento económico del país²⁰, como también lo hacían los nicaragüenses. Según una encuesta realizada en 2017 por Latinobarómetro, el 67 por ciento aprobaba el desempeño del gobierno y el 52 por ciento creía que gobernaba en beneficio del interés público²¹. Hoy, sin embargo, muchos lamentan que están “pagando el precio de once años de silencio”. “Aquí las necesidades materiales básicas son tan enormes que la gente se volvió tolerante hacia los abusos

vistas de Crisis Group, académicos y líderes de la sociedad civil nicaragüenses, Managua, 4-6 de septiembre de 2018. “Empleados públicos de Nicaragua callamos por miedo y necesidad”, EFE, 28 de julio de 2018.

¹⁶ Entrevista de Crisis Group, miembro de la Iglesia católica, Managua, 3 de septiembre de 2018.

¹⁷ Durante años, el gobierno ha intentado sofocar las protestas organizadas por el movimiento “anticanal”, que se oponía al proyecto. Además tomó medidas represivas contra antiguos luchadores de la “Contra” en el norte, acusándolos de participar en actividades criminales después de cobrar beneficios post-conflicto otorgados por el gobierno de Chamorro a principios de los 90. Entrevistas de Crisis Group, líderes cívicos y activistas de los derechos humanos, Managua, 4-6 de septiembre. Para antecedentes de la “recontra” y las supuestas violaciones de los derechos humanos ligadas a su desmovilización, véase: “Los recontras: campesinos armados con amplia base social”, Revista Envío, No. 119, septiembre de 1991, y “Ortega vs. the Contras: Nicaragua Endures an '80s Revival”, *The New York Times*, 7 de marzo de 2016.

¹⁸ Entrevista de Crisis Group, líder de la sociedad civil, Managua, 6 de septiembre de 2018.

¹⁹ Entrevistas de Crisis Group, líderes cívicos y expertos en derechos humanos, Managua, 3-6 de septiembre.

²⁰ La UE, EE.UU. y varios grupos de derechos humanos de Nicaragua han denunciado el deterioro de la situación de la democracia y los derechos humanos. Entrevistas de Crisis Group, líderes de la sociedad civil y expertos en derechos humanos, Managua, 4-7 de septiembre. Para antecedentes, véase: “Nicaragua 2017 Human Rights Report”, Departamento de Estado de EE.UU., 20 de abril de 2018. Un ejemplo de las reseñas positivas del desempeño económico de Nicaragua es “Nicaragua 2015 Article IV Consultation”, Fondo Monetario Internacional, Informe de país No. 16/34, 4 de febrero de 2016.

²¹ Latinobarómetro es una fuente clave de datos estadísticos sobre opinión pública en América Latina. “Daniel Ortega, presidente mejor evaluado de Latinoamérica”, Hispan TV, 13 de febrero de 2018. “Informe 2017”, Corporación Latinobarómetro, 12 de enero de 2018.

democráticos. Tenían miedo de perder sus empleos, así que solo se atrevían a hablar de política en los círculos más íntimos”, admitió un representante de la oposición²².

B. Alianzas estratégicas

En los años posteriores a su reelección en 2006, Ortega entendió que no sería capaz de mantener su gobierno sin el apoyo de la Iglesia católica y el sector privado²³. El cardenal Miguel Obando, que había criticado duramente al gobierno sandinista en los 80, se convirtió en su estrecho aliado. A cambio, unos días antes de la victoria electoral de Ortega en noviembre de 2006, los diputados sandinistas en la Asamblea Nacional apoyaron la prohibición total del aborto²⁴. Asimismo, el presidente a menudo hace referencia a una “Nicaragua cristiana, socialista y solidaria” en sus discursos, lo que ayuda a asegurar el apoyo de la mayoría religiosa del país²⁵.

Por su parte, las organizaciones del sector privado adquirieron una influencia extraordinaria como resultado de su alianza con Ortega, basada en gran medida en la voluntad de obtener beneficios mutuos. La familia Ortega y los miembros del FSLN tienen considerables intereses comerciales, con empresas dedicadas a la distribución de petróleo, estaciones de servicio, transporte, moda y medios de comunicación. Su estrecha relación con los conglomerados nicaragüenses también permitió a Ortega proteger los intereses empresariales de los militares²⁶. “Había un entendimiento de que todas las cuestiones económicas tenían que ser acordadas entre el sector privado y el gobierno”, dijo un importante empresario nicaragüense. “El resultado fueron más de 100 leyes aprobadas de común acuerdo, una sextuplicación de la inversión extranjera y la firma de ocho tratados de libre comercio en cuya redacción participó plenamente el sector empresarial”²⁷. Los planes del gobierno incluían grandes proyectos de infraestructura, entre los que se destacan el canal transoceánico y las zonas de libre comercio en áreas fronterizas.

Los sandinistas afirman que el sector empresarial abandonó este pacto debido a su creciente resentimiento por la división de las ganancias entre el Estado y el sector

²² Entrevistas de Crisis Group con representantes de la oposición, Managua y Ciudad de Guatemala, agosto-septiembre de 2018.

²³ Ortega ha reconocido públicamente que no es un ferviente defensor del sistema democrático. En un programa de televisión de Cuba en 2009 admitió que prefiere el gobierno unipartidario porque “la política multipartidista divide a la nación”. “Montealegre en Sébaco arremete contra Ortega”, *El Nuevo Diario*, 27 de abril de 2009.

²⁴ “El aborto hipoteca a los sandinistas”, *El País*, 22 de enero de 2007.

²⁵ Obando, que murió en junio de 2018, ordenó el casamiento de Ortega y Murillo en una ceremonia católica. Del 80 por ciento de los nicaragüenses que se consideran cristianos, entre el 20 y el 30 por ciento asisten a iglesias evangélicas, que en los últimos años se han expandido rápidamente por toda Centroamérica. “Muere cardenal Obando, aliado de Daniel Ortega”, EFE, 3 de junio de 2018. “International Religious Freedom Report for 2017”, Departamento de Estado de EE.UU., 29 de mayo de 2018.

²⁶ Según el experto en seguridad Roberto Orozco, los principales intereses económicos de los militares son las finanzas y la propiedad inmobiliaria. Entrevista de Crisis Group, periodista, Managua, 6 de septiembre de 2018. “El clan Ortega, una dictadura dinástica”, *El Mundo*, 2 de mayo de 2018. Para más sobre cómo la familia Ortega gestiona su imperio empresarial, véase: “Los anillos de poder y los operadores de Ortega y Murillo”, Confidencial, 16 de abril de 2017.

²⁷ Entrevista de Crisis Group, líder empresarial nicaragüense, Managua, 6 de septiembre de 2018.

privado, que culminó en la disputa sobre la reforma de la seguridad social en abril de 2018, provocada por las demandas del gobierno de que tanto las empresas como los empleados hicieran mayores aportes para financiar el déficit de las pensiones. Los representantes del sector privado, sin embargo, afirman que el razonamiento tras de la decisión de romper el pacto con el presidente fue más gradual²⁸. En particular, dicen, el sector privado se había resistido a las medidas más duras de Ortega, especialmente en relación con el supuesto abuso del sistema electoral y un proyecto de ley en 2015 que habría otorgado al Estado el control de la prestación de servicios de acceso a internet. Según los críticos, el proyecto de ley habría abierto la puerta a la censura en este medio, pero fue suspendido gracias a la presión del sector privado²⁹. Las inquietudes del sector privado sobre el deterioro de las relaciones con el Estado supuestamente se intensificaron tras la elección de Rosario Murillo como vicepresidenta en 2016³⁰.

Venezuela fue otro de los aliados fundamentales de la política económica de Ortega. El día después de su investidura en 2007, Ortega firmó un acuerdo con el difunto presidente venezolano Hugo Chávez que permitía a Nicaragua importar 10 millones de barriles de petróleo cada año. Nicaragua podría pagar la mitad de la factura con préstamos de 25 años a tasas de interés muy bajas mediante un sistema de préstamos de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), un proyecto fundado por Venezuela en 2004 para la integración social y económica de varios países latinoamericanos³¹. La disminución de la producción de petróleo en Venezuela y su ayuda financiera a Nicaragua en 2018 fue abrupta. Los datos del Banco Central de Nicaragua indican que entre 2007 y 2017 Venezuela transfirió \$4,8 mil millones en fondos y préstamos a Nicaragua, mientras que en la primera mitad de 2018 se recibieron tan solo \$9 millones de Venezuela³².

²⁸ “Ya no estaban interesados en estar con el gobierno porque [el pacto] no estaba generando tanto dinero como al principio”, dijo el destacado político del FSLN Jacinto Suárez. Para una perspectiva sandinista sobre la cuestión de la seguridad social, véase: “Gran victoria obtenida por el sandinismo”, *Redvolución*, 16 de agosto de 2018; y “Los enmascarados son de los dos bandos”, *El Faro*, 6 de julio de 2018. Para un análisis crítico de cómo el gobierno manejó la disputa sobre la seguridad social, véase Carlos Chamorro, “Un parteaguas en Nicaragua”, *El País*, 20 de abril de 2018. Para el silencio del sector privado acerca de las medidas autoritarias del gobierno en los últimos años, véase: “El COSEP también es un actor político”, *Confidencial*, 12 de septiembre de 2016.

²⁹ Para el proyecto de ley sobre internet, véase “El Gobierno de Nicaragua crea una ley para controlar Internet”, *El País*, 13 de mayo de 2015; “El cerco se estrecha y en la mira, redes sociales”, *Revista Envío*, No. 433, abril de 2018. Sobre las demandas del sector empresarial de una reforma electoral desde 2016, véase “Líder campesina denunció la represión ante Almagro”, *Confidencial*, 2 de diciembre de 2016.

³⁰ Entrevista de Crisis Group, líder empresarial nicaragüense, Managua, 6 de septiembre de 2018.

³¹ El grupo de distribución del petróleo en Nicaragua es una empresa privada, “Albanisa”, propiedad conjunta de las petroleras estatales de Venezuela y Nicaragua, PDVSA y Petronic respectivamente. Para más información sobre la distribución del petróleo, véanse las siguientes investigaciones de *Confidencial*: “Albanisa’s Secret Accounts”, 5 de marzo de 2011; “The Petro-Dollar Booty”, 8 de junio de 2015; y “Albanisa’s Cash Box”, 9 de abril de 2016.

³² Según informes oficiales de 2015, el 38 por ciento de estos fondos se invirtieron en programas de bienestar social, mientras que el 62 por ciento fue a parar a empresas comerciales en los sectores de energía, agricultura, turismo y medios, la mayoría de ellos supuestamente vinculados al FSLN. Cálculos de Crisis Group provenientes de: “Informe de cooperación oficial externa”, informe del

III. Revuelta, diálogo y repercusiones de la crisis de abril de 2018

Entre abril y julio, una oleada de protestas cívicas desencadenadas por un paquete de reformas a la seguridad social fue sofocada con una brutal represión gubernamental. Los enfrentamientos entre la policía antidisturbios, manifestantes, y grupos progubernamentales, que supuestamente incluían unidades parapoliciales no oficiales, se saldaron con cientos de muertos y numerosas violaciones a los derechos humanos. El intento de diálogo entre el gobierno y representantes de la oposición duró poco debido principalmente a su metodología improvisada, su agenda excesivamente ambiciosa y la falta de compromiso del gobierno sandinista. La conmoción ha causado graves daños a la economía, que se espera siga contrayéndose en 2019.

A. *La revuelta del 18 de abril*

La chispa que detonó los recientes disturbios fue el plan del gobierno, anunciado el 16 de abril de 2018, para reformar el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social reduciendo las pensiones en un 5 por ciento. Además de recortar los beneficios, el paquete de reformas, basado en gran medida en las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, habría incrementado los impuestos a las empresas y los empleadores – una propuesta a la que se opuso la comunidad empresarial, afirmando que las medidas se habrían introducido sin un acuerdo previo con el sector privado y que perjudicarían la competitividad nicaragüense³³. El 18 de abril, los estudiantes lideraron una marcha contra las reformas en la capital, Managua, y dos ciudades más pequeñas al oeste del país, León y Matagalpa, que culminaron en enfrentamientos entre los manifestantes y grupos armados sandinistas supuestamente convocados por el gobierno y coordinados con la policía antidisturbios³⁴.

Banco Central de Nicaragua, octubre de 2018, p. 15. “Informe de cooperación oficial externa”, informe del Banco Central de Nicaragua, abril de 2016, pp. 10-11. “Albanisa’s Secret Accounts”, op. cit.

³³ Un informe del Fondo Monetario Internacional publicado en junio de 2017 instaba al gobierno a reformar su sistema de seguridad social antes de que se quede sin reservas en 2019. “Nicaragua Country Report No. 17/174”, Fondo Monetario Internacional, 27 de junio de 2017. El paquete de reformas que finalmente propuso el gobierno nicaragüense no reflejó exactamente las recomendaciones del FMI. Las reformas generaron tensiones con las principales organizaciones del sector privado, que las rechazaron y exigieron que el gobierno diera marcha atrás. “Empresarios y Gobierno negocian en combo una reforma fiscal y al Seguro Social”, 5 de abril de 2018. “INSS rompe modelo de diálogo y consenso”, comunicado del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), 17 de abril de 2018.

³⁴ Estos grupos, denominados turbas por la oposición, estaban integrados principalmente por ciudadanos apoyados por los programas de patronazgo del FSLN, miembros de las Juventudes Sandinistas y otros civiles progubernamentales no identificados en motocicletas con cascos en un fenómeno similar a los motorizados de Venezuela. Generalmente coordinan sus acciones con la policía antidisturbios de Nicaragua para dispersar marchas antigubernamentales. Entrevista de Crisis Group, ex diplomático, Ciudad de Guatemala, 17 de agosto de 2018; académico nicaragüense, Managua, 6 de septiembre de 2018. “Graves violaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas sociales en Nicaragua”, Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 22 de junio de 2018, pp. 17-19, 46.

Esta violencia desencadenó más protestas que llevaron a nuevos enfrentamientos. Para el 24 de abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), había registrado al menos 25 muertos, principalmente jóvenes manifestantes de áreas urbanas, así como varios heridos durante las protestas³⁵. A medida que aumentó el número de víctimas, la premisa inicial de las manifestaciones – que rechazaban las reformas a la seguridad social – perdió fuerza, especialmente una vez que Ortega acordó anular las medidas unos días después de la primera protesta. Pero para fines de abril, miles de nicaragüenses se manifestaban en las calles para exigir su renuncia³⁶.

Inicialmente lideradas por estudiantes, las protestas reunieron a los detractores de Ortega en un ecléctico frente común. Sus principales integrantes eran el movimiento de campesinos que anteriormente se habían opuesto al proyecto del canal interoceánico, activistas de los derechos humanos, líderes de la sociedad civil y regionales, así como opositores y ex sandinistas que se sentían traicionados por el giro del FSLN hacia un gobierno dinástico unipartidista. Mientras, los antiguos aliados de Ortega, el sector privado y la iglesia, le dieron la espalda y encabezaron muchas de las marchas que reclamaban el fin de la represión. Gran parte del sector privado declaró que su alianza económica con el gobierno había terminado: “después de las reformas [de la seguridad social], ese modelo murió”, dijo un máximo representante del sector privado³⁷.

Las muertes de jóvenes y estudiantes alimentaron la furia contra el gobierno en un país donde “el sueño de toda familia pobre es que sus hijos vayan a la universidad algún día”, en palabras de una académica³⁸. El 30 de mayo – el Día de la Madre en Nicaragua – sucedió un episodio particularmente brutal cuando una marcha liderada por madres de víctimas asesinadas durante las protestas terminó con quince muertos³⁹. Otros cientos murieron entre mayo y julio en varias ciudades durante choques armados que enfrentaron a manifestantes contra la policía antidisturbios y los grupos progubernamentales⁴⁰. Los manifestantes levantaron más de 200 tranques en zonas urbanas por todo el país, una táctica insurgente de finales de los 70 para frenar a las fuerzas de seguridad, cortando las principales calles y forzando al

³⁵ Entre las primeras víctimas, la CIDH también registró el asesinato de un periodista y, según los medios estatales, un agente policial. “CIDH expresa preocupación por muertes en el contexto de protestas en Nicaragua”, comunicado de la CIDH, 24 de abril de 2018. “Así te contamos la multitudinaria marcha contra la represión del Gobierno sandinista”, *La Prensa*, 23 de abril de 2018.

³⁶ “Nicaraguan authorities call for peace after deadly protests”, BBC, 22 de abril de 2018.

³⁷ El Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), la principal cámara empresarial de Nicaragua, y la Cámara Americana-Nicaragüense de Comercio (AmCham) emitieron declaraciones en las que condenaban la violencia. Entrevistas de Crisis Group, líderes de la sociedad civil y miembros de la Iglesia y la Alianza Cívica, Managua, 2-6 de septiembre de 2018. Comunicados del COSEP y la AmCham, 19 de abril de 2018.

³⁸ Entrevista de Crisis Group, académica nicaragüense, Managua, 6 de septiembre de 2018.

³⁹ “Al menos 15 muertos en la marcha de las madres en Nicaragua”, *El País*, 31 de mayo de 2018.

⁴⁰ También en julio, la Iglesia de la Divina Misericordia en Managua estuvo sitiada durante un día cuando más de 100 manifestantes buscaron refugio de los ataques que acabaron con la vida de dos manifestantes. Entrevista de Crisis Group, funcionario humanitario, Managua, 6 de septiembre de 2018. Un reportero estadounidense, presente durante el sitio, describió este desgarrador relato: Joshua Paltrow, “‘They are shooting at a church’: Inside the 15-hour siege by Nicaraguan paramilitaries on university students”, *The Washington Post*, 14 de julio de 2018.

gobierno a aceptar las negociaciones, en este caso con mediación de la Iglesia católica (véase la sección III.C)⁴¹.

Incluso mientras estos intentos de diálogo seguían adelante, a mediados de julio Ortega lanzó la “Operación Limpieza” para dismantelar los tranques, iniciando una nueva fase de la crisis en la que gobierno buscaba restaurar el control de las calles y enjuiciar a los manifestantes⁴². En ciudades como Masaya, un epicentro de la resistencia opositora, la evidencia física de los enfrentamientos desapareció rápidamente a medida que se dismantelaban las barricadas⁴³. Las paredes cubiertas de grafiti contra el gobierno en azul y blanco – los colores de la bandera nicaragüense que se convirtieron en símbolo de las marchas – fueron pintadas de nuevo y la infraestructura dañada por los ataques fue reparada a los pocos días.

Para fines de agosto, las protestas eran menos frecuentes, y las fuerzas de seguridad y las milicias progubernamentales las mantenían bajo control. El 13 de octubre, la policía anunció la prohibición de las protestas que no hubieran sido previamente autorizadas por las autoridades públicas⁴⁴. Las detenciones masivas para capturar a sospechosos de haber participado en las barricadas obligaron a destacados líderes antigubernamentales a ocultarse o a huir a la vecina Costa Rica para evitar ser procesados por cargos de terrorismo⁴⁵. Durante todo este tiempo, el gobierno insistió que las revueltas habían sido un “violento esfuerzo para derrocar al gobierno constitucionalmente elegido”⁴⁶. Fuentes oficiales dijeron que la amenaza a la estabilidad del país y la potencial escalada hacia una “guerra civil” justificaban el uso de la violencia⁴⁷. Según un sacerdote, “Ortega sintió que se le movía el piso” durante las protestas⁴⁸.

B. *Violencia armada y violaciones de los derechos humanos*

El gobierno nicaragüense supuestamente usó fuerzas parapoliciales para dispersar a los manifestantes, según grupos de derechos humanos e informes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), la Comisión

⁴¹ Entrevistas de Crisis Group, miembros de la Alianza Cívica, Managua, 4 de septiembre de 2018.

⁴² Entrevista de Crisis Group, experto en derechos humanos, Managua, 6 de septiembre de 2018.

⁴³ Masaya, un lugar emblemático de la revolución sandinista a 30 km al este de Managua, estuvo parcialmente controlado por manifestantes durante casi tres meses. Los enfrentamientos con la policía, sitiada en su jefatura local, eran constantes, y se saldaron con docenas de muertos y más de cien heridos. Entrevista de Crisis Group, trabajador humanitario, Managua, 6 de septiembre de 2018. “Masaya se atrinchera contra Ortega”, *El Faro*, 5 de junio de 2018.

⁴⁴ Policía Nacional de Nicaragua, comunicados del 28 de septiembre y el 13 de octubre.

⁴⁵ Entrevistas de Crisis Group a exiliados nicaraguenses, Costa Rica, 10 de septiembre de 2018.

⁴⁶ “Our first concern was to avoid a civil war”, *The Washington Post*, 26 de septiembre de 2018.

⁴⁷ Ortega y Murillo han declarado repetidamente que su gobierno es un baluarte de paz y estabilidad, a diferencia de la violencia generada por la revuelta. Entrevista de Crisis Group, ex diplomático nicaragüense, Managua, 4 de abril de 2018. Para la versión del gobierno, véase: “Bret Baier Confronts Nicaraguan Pres. on Alleged Murders of Citizens”, *Fox News*, 23 de julio de 2018. “Ortega niega la represión y culpa a EEUU y al narco de la crisis en Nicaragua”, *EFE*, 4 de septiembre de 2018. “Daniel Ortega: No existe ninguna persecución en Nicaragua”, *Deutsche Welle*, 7 de septiembre de 2018.

⁴⁸ Entrevista de Crisis Group, miembro de la Iglesia católica, Managua, 3 de septiembre de 2018.

Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía Internacional⁴⁹. “Quiénes son realmente es una incógnita”, observó un funcionario de derechos humanos⁵⁰. Sus miembros típicamente se cubren el rostro para ocultar su identidad. “Lo único que parece claro es que responden a una cadena de mando”⁵¹. Los representantes de la oposición insistían en que los grupos obedecían órdenes de la Vicepresidencia y la Alcaldía de Managua, una acusación que dichos funcionarios niegan⁵². En una entrevista televisiva, Ortega confirmó que había civiles armados trabajando para el gobierno y también aludió a la participación de “policías voluntarios” no identificados en algunas operaciones⁵³.

Según la ONU, estas unidades progubernamentales actuaban “de forma conjunta y coordinada” con la policía nicaragüense. Los manifestantes afirman que el gobierno las equipó con armas de alto calibre y desempeñó un papel activo en el acoso, identificación y detención de manifestantes con información recopilada por los Consejos de la Familia, la Comunidad y la Vida, la red de inteligencia comunitaria establecida por el FSLN. El gobierno no ha respondido públicamente a estas acusaciones⁵⁴.

La mayoría de las protestas contra el gobierno eran pacíficas, pero los manifestantes en ocasiones participaban en actos de violencia, incluidos ataques contra empleados públicos. En base a entrevistas con más de 100 oficiales policiales y activistas sandinistas para verificar las denuncias de tortura y abusos de grupos antiguubernamentales, la ONU concluyó que más allá de varios incidentes aislados muy crueles, no se produjeron actos de forma organizados ni recurrente⁵⁵. El 19 de julio,

⁴⁹ El informe de la OACNUDH constató que ya existían indicios previos al 18 de abril del supuesto uso de fuerzas parapoliciales para sofocar protestas relacionadas con las elecciones y el movimiento anticanal. Entrevistas de Crisis Group, expertos en derechos humanos, Managua, 3-6 de septiembre de 2018. “Violaciones de Derechos Humanos y abusos en el contexto de las protestas en Nicaragua”, informe de OACNUDH, 29 de agosto de 2018, pp. 36-38. “Shoot to Kill: Nicaragua’s Strategy to Repress Protests”, Amnesty International, 29 de mayo de 2018, p. 19. “Graves violaciones a los derechos humanos”, op. cit, pp. 17-18.

⁵⁰ Entrevista de Crisis Group, Managua, 4 de septiembre de 2018.

⁵¹ Las teorías en torno a la identidad de los parapolicías van desde ex militares y miembros de la Juventud Sandinista a combatientes extranjeros de Cuba y Venezuela que reciben \$6-15 dólares al día por sus servicios. El experto en seguridad nicaragüense Roberto Cajina señala que algunos de ellos son “pandilleros camuflados”. Entrevista de Crisis Group, funcionario de derechos humanos, Managua, 6 de septiembre de 2017. “Cajina: hay un “silencio cómplice” del Ejército”, Confidencial, 2 de agosto de 2018. “La política de terror del régimen coloca al Ejército ante una encrucijada”, *Revista Envío*, No. 436, julio de 2018.

⁵² Entrevistas de Crisis Group, miembros de la Alianza Cívica y la Iglesia católica, 3-4 de septiembre de 2018. “Violaciones de Derechos Humanos y abusos en el contexto de las protestas”, op. cit. p. 38.

⁵³ Si bien la policía nicaragüense tiene unidades de reserva voluntarias, los expertos en derechos humanos afirman que el gobierno no hizo uso de estas fuerzas para contener las protestas. Entrevistas de Crisis Group, Managua, 6-7 de septiembre de 2017. “Ortega admite la acción de parapolicías enmascarados en la entrevista con Euronews”, EFE, 31 de julio de 2018.

⁵⁴ Los líderes de las protestas entrevistados señalaron el papel activo de los alcaldes, en su mayoría del FSLN, en las actividades de inteligencia para identificar a los manifestantes. Según el experto en seguridad Roberto Cajina, las fuerzas parapoliciales estaban armadas con AK-47s y fusiles Dragunov. Entrevistas de Crisis Group, miembros de la Alianza Cívica, 4 de septiembre de 2018. “La política de terror del régimen”, op. cit. “Violaciones de Derechos Humanos y abusos en el contexto de las protestas”, op. cit.

⁵⁵ Entrevista telefónica de Crisis Group, diplomático, 3 de octubre de 2018.

el gobierno dijo que dieciocho agentes policiales habían sido asesinados y 400 heridos en enfrentamientos⁵⁶.

Tanto las fuerzas de seguridad como los manifestantes participaron en violaciones de los derechos humanos en los tranques levantados por todo el país. Tras los muros de adoquines, un diverso grupo diversos de trabajadores agrarios, jóvenes desempleados, sandinistas desilusionados y, en algunos casos, miembros de pandillas callejeras, se resistieron a las fuerzas de seguridad de Ortega durante más de un mes sin una clara jerarquía de mando. Los abusos de poder por parte de los participantes en las barricadas eran supuestamente habituales. “En los tranques la sensación era de cárcel [lo cual creó un entorno propicio para] delitos como violaciones, asaltos, o el pago de extorsión”⁵⁷. Algunas personas que participaron en las barricadas admitieron que habían usado armas en respuesta a los ataques del gobierno. En la mayoría de los casos sus armas eran rudimentarias, entre ellas morteros caseros, hondas y escudos hechos con barriles⁵⁸. El gobierno calificó la construcción de los tranques como actos “terroristas” llevados a cabo por “fuerzas paramilitares de derecha”⁵⁹.

Las fuentes discrepan en cuanto al número de víctimas de los disturbios y la represión del gobierno. Según una declaración emitida el 18 de octubre por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cifra de asesinados en el marco de las protestas y la represión del Estado desde el 18 de abril ascendía a 325, incluyendo a las víctimas de ambos lados. Los grupos de derechos humanos locales contaron hasta 545 manifestantes asesinados para el 23 de noviembre⁶⁰. El gobierno solo ha reconocido 199 muertes de civiles y agentes de seguridad, afirmando que otras cifras cuentan erróneamente a víctimas de la delincuencia común. Sin embargo, el informe de la ONU señala que es improbable que el número de víctimas haya sido inflado de este modo, dada la baja tasa de homicidios de Nicaragua y el hecho de que la edad y el perfil social de muchas de las víctimas coinciden con los de los manifestantes⁶¹. Un informe de Amnistía Internacional publicado el 29 de mayo señaló que muchas de las personas asesinadas durante las marchas habían recibido disparos en la cabeza, cuello y pecho, lo que indicaría un patrón de “disparar a matar”⁶². El gobierno niega estos informes y los condena como “totalmente sesgados”⁶³.

Del lado progubernamental, la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz de la Asamblea Nacional de Nicaragua – creada el 29 de abril por la legislatura dominada por el FSLN para investigar los abusos cometidos durante la crisis – dijo que no podía con-

⁵⁶ “Graves violaciones a los derechos humanos”, op. cit, pp. 23-24. “Discurso del presidente Daniel Ortega en conmemoración al 39/19 del triunfo de la revolución popular”, YouTube, 21 de julio de 2018.

⁵⁷ Entrevista de Crisis Group, experto en derechos humanos, 6 de septiembre de 2018.

⁵⁸ Entrevistas de Crisis Group, Costa Rica y Ciudad de Guatemala, agosto-septiembre de 2018. “Violaciones de Derechos Humanos y abusos en el contexto de las protestas”, op. cit. p. 15.

⁵⁹ “Entrevista al Presidente-Comandante Daniel Ortega”, La Voz del Sandinismo, 31 de julio de 2018.

⁶⁰ “CIDH alerta sobre nueva ola de represión en Nicaragua”, 18 de octubre de 2018. “Al menos 545 muertos y 4.533 heridos deja la crisis en Nicaragua, según una ONG”, EFE, 23 de noviembre de 2018.

⁶¹ Asimismo, las cifras que cita el informe de la ONU indican que el 91 por ciento de las víctimas fueron asesinadas cerca de las marchas o en el cruce de fuego entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad. “Graves violaciones a los derechos humanos”, op. cit, p. 24.

⁶² “Shoot to Kill”, op. cit. p. 32.

⁶³ “Los enmascarados son de los dos bandos”, op. cit.

firmar las denuncias realizadas por ONG nacionales de más de 1 000 casos de desapariciones forzadas hasta el 23 de noviembre. Los grupos de derechos humanos afirman que más del 80 por ciento de los detenidos fueron capturados por unidades parapoliciales, y muchos de ellos posteriormente fueron liberados o acusados formalmente; aún no se dispone de datos verificables sobre el número de desaparecidos presuntamente muertos o detenidos. Un experto en derechos humanos afirmó que hasta ahora no se han observado “patrones de desapariciones forzadas”⁶⁴.

En la mayoría de los casos conocidos, los detenidos – oficialmente 273 aunque las ONG locales contabilizan hasta 558 – han sido enviados a la cárcel de El Chipote en Managua o a otras prisiones cercanas⁶⁵. Los grupos de derechos humanos denuncian que, del total de detenidos, unos 300 enfrentan a juicios sin garantías procesales presididos por jueces progubernamentales⁶⁶. Los activistas locales denuncian una “falta total de garantías procesales”, como el hecho de que los fiscales hayan llamado a casi 50 testigos a declarar contra los acusados, en algunos casos sin que esté presente un abogado defensor. “La acusación típica es de terrorismo y crimen organizado” dijo uno de ellos, añadiendo que la mayoría de las sentencias no pueden ser apeladas. El gobierno no respondió a las solicitudes de los organismos de derechos humanos de presenciar los juicios⁶⁷, y a principios de diciembre la Asamblea Nacional votó a favor de despojar a varias organizaciones de derechos humanos de su registro legal⁶⁸.

C. *El fracaso del diálogo*

El 22 de abril, presidente Ortega convocó a la Conferencia Episcopal de Nicaragua – la principal autoridad de la Iglesia católica en el país – para que mediara entre el gobierno y los manifestantes. Desde entonces, la Iglesia y el nuncio apostólico han sido los únicos canales de comunicación estables entre los grupos antigubernamen-

⁶⁴ La cuestión de las desapariciones forzadas sigue siendo un tema extremadamente delicado en América Latina tras las violaciones masivas de los derechos humanos cometidas durante las dictaduras en Argentina y Chile en los 70 y 80. Entrevistas de Crisis Group, expertos en derechos humanos, Managua, 4-6 de septiembre de 2018. Entrevista telefónica de Crisis Group, diplomático, 3 de octubre de 2018. Informe Preliminar de la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz de la Asamblea Nacional de Nicaragua, 10 de julio de 2018, p. 50. “Al menos 545 muertos”, op. cit.

⁶⁵ El mismo Ortega estuvo encarcelado en El Chipote, entonces conocido como La Loma, por sus actividades guerrilleras en los 70. José Luis Rocha, “¿Qué estamos logrando con la rebelión de abril?”, *Revista Envío*, agosto de 2018. “Alianza Cívica afirma que existen 558 “presos políticos” en Nicaragua”, EFE, 24 de octubre de 2018.

⁶⁶ “Gobierno de Nicaragua solo reconoce 273 personas detenidas por protestar”, *El Nuevo Diario*, 5 de noviembre de 2018. “En Nicaragua hay 558 presos políticos según Alianza Cívica”, EFE, 24 de octubre de 2018.

⁶⁷ Si bien la Asamblea de Nicaragua aprobó dos leyes el 17 de julio – la Ley Creadora de la Unidad de Análisis Financiero y la Ley Contra el Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva – que establecían sentencias de hasta 20 años de cárcel para actos de terrorismo, las autoridades judiciales habrían estado usando la legislación antiterrorista existente bajo los artículos 394-398 del Código Penal nicaragüense para las acusaciones. Entrevista de Crisis Group, expertos en derechos humanos, Managua, 3-6 de septiembre de 2018. Entrevista telefónica de Crisis Group, diplomático, 3 de octubre de 2018.

⁶⁸ “Cancelación de personerías a ONG en Nicaragua preocupa a la CIDH”, *El Nuevo Diario*, 12 de diciembre de 2018.

tales y Ortega, y en varias ocasiones han persuadido al presidente a que establezca corredores humanitarios y libere a manifestantes encarcelados⁶⁹.

Los obispos también se hicieron cargo de unificar las diversas partes del movimiento antigubernamental bajo el paraguas de la “Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia” como contraparte del gobierno en las negociaciones. Los líderes religiosos nominaron a miembros de cuatro organizaciones del sector privado, el movimiento campesino, grupos representantes de las regiones y la sociedad civil de Nicaragua, y les encargaron la tarea de acordar un programa de diálogo que reflejara las demandas de los manifestantes. La Alianza también incluyó a la Coalición Universitaria, que reunía a diferentes asociaciones de estudiantes, quienes habían “adquirido la legitimidad [necesaria para participar en el diálogo] porque ellos pusieron los muertos”, afirmó una fuente diplomática en Managua⁷⁰. Los obispos accedieron a iniciar el diálogo cuando el gobierno confirmó que invitaría a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a evaluar la situación de los derechos humanos en el país – uno de los requisitos de los obispos⁷¹.

El Diálogo Nacional comenzó el 16 de mayo en un clima de hostilidad abierta. Los medios locales e internacionales se reunieron en un seminario en Managua para cubrir una reunión sin precedentes desde los 90. Estudiantes, campesinos y representantes de la sociedad civil y el sector empresarial se enfrentaron públicamente a la pareja presidencial Ortega-Murillo. Cientos de miles de nicaragüenses vieron la transmisión en vivo del evento por televisión y en redes sociales. Un obispo dio inicio a la sesión con una larga homilía, tras la cual un estudiante marcó una pauta más combativa, gritando “¡Ríndase!” a Ortega y Murillo⁷². “El lenguaje era caliente”, dijo un sacerdote católico presente en el evento. “Parecía que se iban a tirar las sillas”⁷³.

Tras un breve paréntesis a principios de junio por la violencia de la marcha del Día de la Madre, el 12 de junio Ortega aceptó un “Acuerdo Constitucional y Programa de Ruta” elaborado por la Iglesia unos días antes, que proponía una agenda basada en la rendición de cuentas en materia de derechos humanos y la reforma democráti-

⁶⁹ Anteriormente los obispos habían mediado exitosamente durante la crisis de la seguridad social de junio de 2013. Entrevistas de Crisis Group, miembros de la Iglesia católica y la Alianza Cívica, Managua, 3-4 de septiembre de 2018. “Brutal desalojo de ancianos y jóvenes”, Confidencial, 26 de junio de 2013.

⁷⁰ Los representantes de la Alianza Cívica dijeron que los criterios en los que se basó la Iglesia católica para elegirlos fueron, en primer lugar, su capacidad de representar a sectores de la sociedad civil más amplia, y en segundo lugar su voluntad de “no ofender” a Ortega con una coalición demasiado agresiva. Entrevistas de Crisis Group, diplomático y miembros de la Alianza Cívica, Managua, 4-6 de septiembre de 2018.

⁷¹ Otras de las condiciones previas fueron la liberación de detenidos, la retirada de las fuerzas paramilitares y el esclarecimiento de la responsabilidad por las muertes. El 11 de mayo, el Papa Francisco envió una carta al presidente Ortega instándole a alcanzar una solución negociada a la crisis y apoyando por lo tanto la puesta en marcha del Diálogo Nacional unos días después. “Daniel Ortega invita a la CIDH a Nicaragua”, *El Nuevo Diario*, 14 de mayo de 2018. Comunicado de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, 3 de mayo de 2018. “El Papa pide “diálogo sincero” en Nicaragua”, *El Nuevo Diario*, 2 de junio de 2018.

⁷² “Nicaragua: así fue el duro comienzo del diálogo nacional entre el gobierno de Daniel Ortega, estudiantes y líderes de oposición”, BBC Mundo, 16 de mayo de 2018.

⁷³ Entrevista de Crisis Group, miembro de la Iglesia católica, Managua, 3 de septiembre de 2018.

ca⁷⁴. Las partes se reunieron en otras cuatro ocasiones en comités mixtos integrados por representantes del gobierno y la Alianza Civil – con dos grupos de trabajo sobre reformas electorales y judiciales, además de una Comisión de Seguridad y Verificación encargada de supervisar el proceso y reducir las hostilidades. El programa incluía ambiciosos temas de debate como la posibilidad de adelantar las elecciones de 2021 al 29 de marzo de 2019 y sustituir a todos los magistrados del Consejo Supremo Electoral, la máxima autoridad electoral de Nicaragua⁷⁵.

Las negociaciones enfrentaron grandes retos. Las partes en ningún momento acordaron poner fin a la represión o dismantlar los tranques, por lo que la confianza entre ellas, ya de por sí débil, se vio constantemente socavada por la represión del gobierno y la creación de nuevas barricadas opositoras, sobre las cuales la propia Alianza Cívica tenía poca influencia. Sin la capacidad de manejar los tranques, sus representantes no podían explotar su mayor poder ante el gobierno⁷⁶.

Aun así, el diálogo logró algunas concesiones del gobierno, incluida la creación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, encargado de analizar las violaciones de los derechos humanos⁷⁷. Varios diplomáticos que se reunieron con Ortega y funcionarios del gobierno durante el diálogo creen que cedieron por miedo a la magnitud e impacto del movimiento de protesta en plena transformación. Las principales rutas del país estaban afectadas por cortes que perjudicaban el comercio regional. Unos 400 camioneros llevaban más de un mes varados⁷⁸. Supuestamente Ortega y Murillo

⁷⁴ El 18 y el 21 de mayo la sesión plenaria del Diálogo Nacional había acordado un cese al fuego que no fue respetado, además de reconocer las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tras su visita a Nicaragua el 17-21 de mayo de 2018. Entrevista de Crisis Group, miembro de la Iglesia católica, Managua, 3 de septiembre de 2018. Comisión de Mediación y Testigos del Diálogo Nacional, comunicados oficiales, 18-21 de mayo y 13 de junio de 2018.

⁷⁵ Comisión de Mediación y Testigos del Diálogo Nacional, comunicado, 16 de junio de 2018.

⁷⁶ Solo un puñado de tranques fueron dismanteladas pacíficamente en base a la cooperación entre el gobierno y la oposición. Dos funcionarios internacionales que monitorearon la crisis afirman que la operación del gobierno para dismantlar estas barricadas por lo general se llevó a cabo de manera ordenada y disciplinada por las fuerzas de seguridad nicaragüenses. Entrevistas de Crisis Group, Managua, 4-6 de septiembre de 2018. Entrevista telefónica de Crisis Group, diplomático, 30 de agosto de 2018.

⁷⁷ Otros avances incluyeron el establecimiento del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), también parte de la Comisión Interamericana, para brindar apoyo al Diálogo Nacional y asesorar a los grupos de la sociedad civil en temas de memoria, verdad, justicia y reparación; y la aceptación por parte del gobierno de una misión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que el 26 de junio. “Acuerdo entre la Secretaría General de la OEA, la CIDH y el Gobierno de Nicaragua”, 30 de junio de 2018. “CIDH instala el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI)”, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, comunicado de prensa, 25 de junio de 2018. “Nicaragua: Hoy inicia misión oficial de ONU Derechos Humanos”, OACNUDH, comunicado de prensa, 26 de junio de 2018.

⁷⁸ Nicaragua, que limita con Costa Rica al sur y con Honduras y El Salvador al norte, es un punto de tránsito para el 92 por ciento del transporte regional. Entrevista de Crisis Group, ex diplomático nicaragüense, Ciudad de Guatemala, 17 de agosto de 2018. “Migración rechaza 9 de cada 10 solicitudes”, comunicado, gobierno de Costa Rica, 19 de junio de 2018. “Comercio en la región se prepara para caída por crisis en Nicaragua”, El Periódico, 6 de julio de 2018.

dijeron en privado que como último recurso accederían a las reformas y elecciones anticipadas siempre y cuando se les permitiera participar en los comicios⁷⁹.

No obstante, ciertos observadores de las negociaciones mantienen que para el gobierno el Diálogo Nacional no fue más que una táctica dilatoria para dismantlar las barricadas y restablecer su autoridad absoluta. “El gobierno nunca aceptó el programa de diálogo. Él [Ortega] veía el proceso como una vía para deshacerse de ellos [la Alianza Cívica]”, dijo un diplomático en Managua⁸⁰.

En varias ocasiones, los gestos del gobierno demostraron estar vacíos de contenido. Antes del comienzo del diálogo, el 29 de abril, la mayoría oficialista en la Asamblea de Nicaragua creó la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz, pero solo designó a miembros cercanos al FSLN. Ortega invitó a la OEA y a organismos de derechos humanos de la ONU a Nicaragua, pero ordenó al ministerio de Asuntos Exteriores que controlara todas sus fuentes de información y no permitiera a los funcionarios salir de Managua⁸¹. Tras el éxito de la “Operación Limpieza”, el FSLN abandonó las negociaciones por completo, y a finales de agosto Ortega expulsó a la misión de derechos humanos de la ONU tras la publicación de un informe que lo criticaba. Según un activista estudiantil, “nunca hubo un verdadero diálogo... desde el principio el gobierno nos acusó de conspiradores”⁸².

Si bien la explotación del diálogo por parte del gobierno impidió que tuviera éxito, también lo hicieron las aspiraciones de la Alianza Cívica. “Sus expectativas no eran realistas. Esperaban que EE.UU. escoltara a Ortega fuera del país”, observó un funcionario estadounidense⁸³. A los negociadores, diplomáticos y funcionarios internacionales en Managua les preocupaban las demandas de la coalición antiguubernamental. En retrospectiva, los líderes de la oposición lo reconocen: “En abril nos cegó el momento. Realmente pensamos: Ortega se va”⁸⁴.

El golpe definitivo al diálogo vino en forma de ataques contra los mediadores, quienes a ojos de los círculos sandinistas estaban más cerca de la Alianza Cívica que del gobierno. El 9 de julio, simpatizantes del FSLN asaltaron al cardenal Leopoldo Brenes, el nuncio papal Waldemar Sommertag y otros curas. Desde entonces, varios líderes religiosos han condenado abiertamente al gobierno, un sentimiento compartido por los miembros de la Conferencia Episcopal. “Soy víctima de una campaña de represión, desprestigio y acoso”, declaró el obispo Silvio José Báez después de que el ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua Denis Moncada lo acusara en un evento público celebrado el 28 de octubre de organizar un golpe con ayuda de la extrema derecha. El gobierno a su vez cuestionó la idoneidad de la Iglesia como mediadora:

⁷⁹ Entrevista telefónica de Crisis Group, diplomático, 30 de agosto de 2018.

⁸⁰ Entrevistas de Crisis Group, miembros de la Iglesia, Alianza Cívica y diplomático, Managua, 4-6 de septiembre de 2018.

⁸¹ Entrevistas de Crisis Group, Managua, 4-6 de septiembre de 2018. Entrevista telefónica de Crisis Group, diplomático, 3 de octubre de 2018. “Asamblea aprueba polémica Comisión de la Verdad”, Confidencial, 29 de abril de 2018.

⁸² Entrevista de Crisis Group, miembro de la Alianza Cívica, Managua, 4 de septiembre de 2018.

⁸³ Entrevista telefónica de Crisis Group, diplomático, 30 de agosto de 2018.

⁸⁴ Entrevistas de Crisis Group, diplomáticos, participantes en el Diálogo Nacional y miembros de grupos opositores, Managua y San José, 3-10 de septiembre de 2018. Entrevista telefónica de Crisis Group, diplomático, 30 de agosto de 2018.

“Yo diría que la credibilidad de la Conferencia Episcopal se vio dañada por la actitud de algunos obispos”, dijo Ortega el 30 de julio⁸⁵.

Tras el colapso de las negociaciones, el gobierno anunció que no aceptaría a la Alianza Cívica como contraparte en las negociaciones. Un sandinista cuestionó si los “portavoces autoproclamados” de la oposición realmente representaban a un grupo social significativo⁸⁶. Al gobierno también le frustró el hecho de que incluso cuando cumplió – aunque solo de forma parcial y en sus propios términos – con las demandas de la Alianza Cívica en materia de derechos humanos, sus contrapartes no procedieron a desmantelar las barricadas: “ellos [la Alianza Cívica] vinieron con demandas sin querer dar nada [a cambio]”, dijo Jacinto Suárez, un líder del FSLN en la Asamblea⁸⁷.

D. Crisis económica

La economía de Nicaragua, que solía ser una de las más pujantes de la región, ha sido duramente golpeada por la revuelta. Según grupos del sector privado, 417 000 nicaragüenses – más del 14 por ciento de la fuerza laboral del país – han perdido el empleo desde el comienzo de la crisis⁸⁸. Las pérdidas económicas en la primera mitad del año ascienden a \$1 180,6 millones – en torno al 8,6 por ciento del PIB de Nicaragua – según fuentes oficiales, mientras que el FMI estima que el PIB se contraerá en un 4 por ciento este año⁸⁹. Pese al crecimiento de los últimos años, Nicaragua sigue siendo un país pobre sin recursos naturales y con una economía vulnerable a una fuerte pérdida de confianza por parte del sector empresarial y los inversores.

Conscientes de estos riesgos, el gobierno y las organizaciones del sector privado han explotado la amenaza del deterioro económico para perjudicarse mutuamente. La Alianza Cívica usó los tranques para dañar el comercio regional reduciendo en un 80 por ciento el tránsito de mercancías por tierra entre mayo y junio, y convocó tres huelgas nacionales que fueron ampliamente seguidas en las áreas urbanas⁹⁰. El gobierno también apretó las tuercas al sector privado. Entre otras cosas, supuestamente expropió tierras que pertenecían a empresarios nicaragüenses y se las entregó a familias de bajos ingresos. No obstante, las autoridades no reconocen que esto haya sido una práctica oficial, de hecho en algunos casos han promovido el desalojo de

⁸⁵ Entrevista de Crisis Group, miembro de la Iglesia católica, Managua, 3 de septiembre de 2018. “El canciller acusa a sectores de la Iglesia de terrorismo y golpismo”, 100% noticias, 26 de octubre de 2018. “An Exclusive Interview with Nicaraguan President Daniel Ortega”, Grayzone, 30 de julio de 2018.

⁸⁶ “Gran victoria obtenida por el sandinismo”, op. cit.

⁸⁷ “Los enmascarados son de los dos bandos”, op. cit.

⁸⁸ “Unos 417.000 empleos se han perdido en Nicaragua por la crisis, según patronal”, EFE, 9 de noviembre de 2018. Datos del Banco Mundial, disponibles en: <https://bit.ly/2qURjLo>

⁸⁹ “Gobierno admite deterioro económico por protestas”, *El Nuevo Diario*, 2 de octubre de 2018. “Misión del FMI concluye visita a Nicaragua”, Fondo Monetario Internacional, comunicado de prensa, 31 de octubre de 2018.

⁹⁰ Entrevista de Crisis Group, empresario nicaragüense, Managua, 6 de septiembre de 2018. “Crisis de Nicaragua: Tránsito de mercancías se redujo en cerca de un 80%”, Mundo Marítimo, 10 de agosto de 2018.

personas que habían ocupado tierras confiscadas⁹¹. Asimismo, la Asamblea Nacional ha aprobado la creación de una empresa pública para manejar el comercio exterior y ha otorgado nuevas facultades discrecionales a la Unidad de Análisis Financiero, que investiga casos de posible blanqueo de dinero y financiamiento del terrorismo, para acceder a los datos personales de los ciudadanos. Las organizaciones del sector privado consideran que ambas iniciativas son esfuerzos inconstitucionales para reforzar el poder del Estado sobre las empresas⁹².

El forcejeo entre Ortega y el sector privado ha perjudicado los intereses de ambos, que anteriormente estaban entrelazados. “A la gente del gobierno le ha perjudicado tanto lo que está pasando como a nosotros”, lamentó un empresario nicaragüense⁹³. Si continúan las tensiones, la economía más pequeña de Centroamérica podría caer en la recesión. Según expertos económicos, los riesgos a largo plazo incluyen el crecimiento económico negativo, la reducción de los ingresos fiscales, la eliminación de los subsidios, y el aumento del desempleo. Las reformas del Instituto de Seguridad Social – las mismas que desencadenaron la revuelta cívica – no se pueden postergar durante mucho más tiempo, ya que se prevé que sus reservas se agoten para 2019⁹⁴.

⁹¹ Según la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua, para mediados de octubre 5 000 de las 6 900 hectáreas confiscadas desde abril seguían estando ocupadas. Entrevista telefónica de Crisis Group, 1 de noviembre de 2018. “Tomatierras causan daños de 24 millones”, *El Nuevo Diario*, 31 de octubre de 2018. Para las supuestas acciones del gobierno en relación a la toma de tierras, véase: “Ortega intenta desalojar tomatierres”, *Confidencial*, 23 de septiembre de 2018; “Tomatierras del régimen tendrán que pagar si quieren un lote en Managua”, *La Prensa*, 7 de noviembre de 2018.

⁹² Las empresas temen que la Unidad de Análisis Financiero lleve a cabo investigaciones de tipo policial políticamente motivadas, y que la Empresa Nicaragüense de Importaciones y Exportaciones (Enimex) solo promueva aquellas empresas que estén alineadas con el gobierno. Para más, véase: “Cosep recurrirá legalmente contra Enimex”, *El Nuevo Diario*, 1 de noviembre de 2018. “Cosep recurrirá por inconstitucionalidad contra Ley de la Unidad de Análisis Financiero”, *La Prensa*, 11 de octubre de 2018.

⁹³ Entrevista de Crisis Group, empresario nicaragüense, Managua, 6 de septiembre de 2018.

⁹⁴ Entrevista de Crisis Group, economista, Managua, 6 de septiembre de 2018. “Nicaragua Country Report No. 17/174”, op. cit.

IV. Perspectivas de diálogo y reforma

A estas alturas la reanudación del diálogo parece improbable dados los escasos incentivos del gobierno para reiniciar las negociaciones y el estado de la oposición, que está teniendo dificultades para decidir sobre su futuro y liderazgo. No obstante, dada la crisis económica del país y la indignación pública por la violenta represión, no se puede descartar que haya nuevas protestas y más represión. Si no se abordan las tensiones políticas, también podría aumentar la inseguridad y los riesgos humanitarios en la región. Si bien son pequeñas y débiles comparadas con sus pares en otros países centroamericanos, las pandillas callejeras de Nicaragua supuestamente habrían colaborado tanto con las fuerzas gubernamentales como con los manifestantes opositores⁹⁵. Mientras, miles de nicaragüenses han huido a la vecina Costa Rica para escapar a la pobreza y la represión estatal. Entre enero y febrero, un total de 13 697 habrían solicitado asilo formal en el país – un marcado aumento comparado con 2017 – mientras que en el mismo periodo un total de 40 386 personas habrían llegado al país en busca de protección internacional⁹⁶.

Implementar reformas electorales antes de los comicios de 2021 es la alternativa más realista que tiene el presidente Ortega para reducir las tensiones y recuperar algo de su reputación internacional. Sus adversarios deberían ver las reformas como una manera de allanar el camino para un futuro diálogo y cambios más profundos, sobre todo en relación a los derechos humanos y el sistema judicial.

A. *Incentivos para reanudar las negociaciones*

El presidente Ortega ha aplacado las protestas con sangre, lo cual a pesar de haberle costado gran parte de su apoyo popular y de varias potencias extranjeras no ha sido suficiente incentivo para llevarle a hacer concesiones. Consciente de la posibilidad de que haya nuevos levantamientos en el futuro, el gobierno parece reacio a desarmar a los grupos parapoliciales o replantear su voluntad de silenciar las protestas mediante la violencia. También cuenta con la infraestructura judicial y de inteligencia necesaria para procesar a los opositores a la vez que protege a los partidarios sandinistas de la investigación penal. El partido FSLN sigue siendo la principal fuer-

⁹⁵ El sociólogo José Luis Rocha afirmó en un artículo de junio de 2018 que desde 2015 los militantes del FSLN han ofrecido dinero, armas, municiones, transporte e impunidad a pandilleros activos y retirados dispuestos a participar en acciones “espontáneas” para reprimir a los opositores que se manifestaban contra el fraude electoral. “Breve historia de las pandillas del reparto Schick: ¿los “vandálicos” de abril y mayo son pandilleros?”, *Revista Envío*, No. 435, junio de 2018. En cuanto a la supuesta colaboración de los opositores con pandillas, véase “Violencia armada en Nicaragua: un producto importado”, *El 19 Digital*, 27 de junio de 2018.

⁹⁶ Véase “Observaciones preliminares sobre la visita de trabajo para monitorear la situación de personas nicaragüenses que se vieron forzadas a huir a Costa Rica”, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 1 de noviembre de 2018. El informe sobre derechos humanos de la ONU y varios medios inicialmente mencionaron una cifra de cerca de 23 000 solicitantes de asilo nicaragüenses a consecuencia de la represión. Sin embargo, esa cifra no coincide con los datos oficiales del gobierno de Costa Rica, e incluye tanto las solicitudes de asilo registradas como las pendientes. Tweet de Francisca Fontanini, portavoz de ACNUR, 16 de septiembre de 2018. “Miles de personas que huyeron de la violencia en Nicaragua hoy buscan refugio en Costa Rica”, *Infobae*, 6 de septiembre de 2018.

za política de Nicaragua, y en los últimos tiempos no ha mostrado públicamente ninguna fractura interna significativa⁹⁷.

Por su parte, la oposición está sumida en el caos y aún no ha logrado convertirse en un sólido contrapeso al FSLN. La Unidad Nacional Azul y Blanco – un movimiento que reúne a más de 40 organizaciones críticas con gobierno, incluida la Alianza Cívica – fue creada el 4 de octubre con el objetivo de competir con Ortega en unas futuras elecciones. Pero se trata de un movimiento de la sociedad civil sin un claro liderazgo ni estructura organizativa⁹⁸. Su diversa membresía, que va desde ricos líderes empresariales a estudiantes universitarios, abarca una amplia gama de intereses que complican la toma de decisiones internas. “Lo único que tienen en común es su oposición a Ortega”, dijo una fuente diplomática⁹⁹. Aparte de huelgas nacionales y manifestaciones, su capacidad para movilizar a simpatizantes es limitada comparada con la del gobierno¹⁰⁰. Asimismo, la relación entre este movimiento y los partidos de la oposición en Nicaragua aún no ha sido establecida, ya que el largo historial de Ortega de manipulación y cooptación de la oposición oficial ha resultado en el descrédito de estos partidos¹⁰¹.

Todo esto hace que la reanudación de las negociaciones resulte improbable en el corto plazo. Incluso dentro de la Alianza Cívica, cuyos miembros han reclamado una y otra vez el retorno a las negociaciones, figuras destacadas concluyen que no se dan las condiciones necesarias: “No se puede dialogar con este nivel de represión”, dijo un miembro de la oposición¹⁰². Revivir el formato establecido del Diálogo Nacional probablemente no sea la mejor manera de fomentar las negociaciones entre ambas partes dado que el compromiso del gobierno con el proceso fue mínimo y no contó con expectativas realistas ni una agenda definida. Asimismo, para el gobierno las autoridades religiosas han perdido su credibilidad como mediadoras y se han ali-

⁹⁷ Sin embargo, fuentes cercanas al gobierno sugieren que el apoyo del FSLN a la represión no es unánime, y que algunos de sus miembros supuestamente se oponen a la posibilidad de que la vicepresidenta Murillo reemplace a su marido, aunque por ahora no ha surgido ninguna alternativa con una base de poder suficiente para competir contra ella. Entrevistas de Crisis Group, Managua, 6-7 de septiembre de 2018. En el pasado, el FSLN ha sufrido varias escisiones, y solo tres de los nueve miembros originales de su Dirección Nacional, incluido Ortega, ahora apoyan al partido. Todos sus miembros siguen vivos excepto el cofundador del FSLN Tomás Borge, que murió en 2012, y Carlos Núñez, en 1990. “Muere Tomás Borge, comandante de la revolución nicaragüense”, *El País*, 1 de mayo de 2012.

⁹⁸ Aparte de la Alianza Cívica, el movimiento antigubernamental está compuesto por otros 40 grupos como la Articulación de Movimientos Sociales y Organizaciones de la Sociedad Civil, integrada por ONG de base. Entrevistas de Crisis Group, líderes de la sociedad civil, Managua y San José, 4-10 de septiembre de 2018. “Nace Unidad Nacional Azul y Blanco”, *Euronews*, 4 de octubre de 2018.

⁹⁹ Entrevista de Crisis Group, experto en derechos humanos, 4 de septiembre de 2018.

¹⁰⁰ Entrevistas de Crisis Group, diplomático, miembro de la oposición y experto en derechos humanos, Managua, 4-6 de septiembre de 2018. Entrevista telefónica de Crisis Group, diplomático, 30 de agosto de 2018.

¹⁰¹ Una encuesta de Cid-Gallup realizada el 27 de septiembre halló que el FSLN seguía siendo el principal partido político con el apoyo del 23 por ciento de los participantes, mientras que los más pequeños Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y el Partido Liberal Independiente (PLI) tan solo contaban con el apoyo del 4 y el 1 por ciento respectivamente. El 67 por ciento de los participantes declararon que no estaban alineados con ningún partido político. “El 61% de los nicaragüenses exige la renuncia de Daniel Ortega y su esposa, según una encuesta”, *Infobae*, 27 de septiembre de 2018.

¹⁰² Entrevista de Crisis Group, miembro de la oposición, Managua, 4 de septiembre de 2018.

neado más con los manifestantes. En general, el espacio para las voces moderadas se ha reducido ya que tanto el FSLN como el movimiento opositor han mantenido una retórica de “guerra y resistencia” desde el fin de las negociaciones¹⁰³.

No obstante, la estrategia de contención del gobierno tiene sus limitaciones y podría ser cuestión de tiempo que surjan más protestas u otras formas de disenso, que probablemente llevarían a nuevos enfrentamientos. “La gente ha perdido el miedo a la protesta”, dijo un ex diplomático nicaragüense¹⁰⁴. Incluso si la mayoría de los activistas por ahora siguen comprometidos con la protesta pacífica, la progresiva criminalización del disenso público podría provocar un mayor resentimiento y temeridad en las acciones contra el gobierno. Según el informe *Latinobarómetro 2018*, el apoyo público por el gobierno de Ortega disminuyó del 67 por ciento al 23 por ciento tras la revuelta de abril, mientras que las encuestas sugieren que más de la mitad de los nicaragüenses preferirían unas elecciones anticipadas¹⁰⁵.

A la luz de los riesgos que enfrenta su gobierno a causa de la pérdida de popularidad, la ruptura de los lazos con sus principales aliados y la crisis económica, Ortega haría bien en considerar las concesiones para aplacar a sus adversarios. El arte del compromiso táctico para mantener la estabilidad no es una novedad para los sandinistas, que permitieron que las elecciones de 1984 y 1990 se celebraran pese a sus dudas en ambos casos, y desarrollaron su poder a lo largo de los últimos diez años en base a alianzas con antiguos adversarios. Dado este historial de compromiso, el eje de la campaña opositora y la presión internacional debería ser un conjunto de demandas razonables centradas en la reforma democrática.

B. Compromiso y presión internacional

La diplomacia de alto nivel entre Ortega y la ONU con apoyo de la Iglesia católica podría lograr que Ortega acepte otorgar concesiones específicas, en particular en relación a las reformas electorales. A pesar de sus diferencias con algunos obispos católicos, la pareja gobernante aún considera al nuncio apostólico en Nicaragua, Waldemar Sommertag, un intermediario válido dispuesto a apoyar la mediación internacional¹⁰⁶.

El secretario general de la ONU, António Guterres, también mantiene relaciones cordiales con el gobierno nicaragüense a pesar de la hostilidad generalizada contra la ONU que reina en Nicaragua, pero debe actuar sin el Consejo de Seguridad ya que China y Rusia probablemente bloquearían cualquier acción en este ámbito¹⁰⁷. Guterres

¹⁰³ Entrevista de Crisis Group, experto en derechos humanos, 4 de septiembre de 2018.

¹⁰⁴ Entrevista de Crisis Group, ex diplomático, Ciudad de Guatemala, 17 de agosto de 2018. “Cid Gallup: 61 por ciento exige renuncia de Ortega-Murillo”, op. cit.

¹⁰⁵ “Informe 2018”, Corporación Latinobarómetro, 9 de noviembre de 2018, p. 18. “Cid Gallup: 61 por ciento exige renuncia de Ortega-Murillo”, Confidencial, 26 de septiembre de 2018.

¹⁰⁶ Entrevista de Crisis Group, Managua, 6 de septiembre de 2018.

¹⁰⁷ El 5 de septiembre, el Consejo de Seguridad de la ONU debatió la cuestión de Nicaragua. El debate se centró en si la ONU estaba obligada a responder a los primeros indicios de conflicto y violaciones de derechos humanos o si debería abstenerse de intervenir en las cuestiones internas de Nicaragua, en base a que la crisis no representaba un amenaza a la paz y la seguridad internacional. Rusia y China adoptaron esta última postura. “Security Council takes up Nicaragua Crisis, with some reservations”, UN News, 5 de septiembre de 2018.

debería designar a un enviado a Nicaragua para compensar la débil presencia de la ONU en el país desde 2015, cuando Ortega echó al Programa de la ONU para el Desarrollo, acusándolo de “injerencia política”¹⁰⁸. Persuadir al gobierno exige confidencialidad, y deber manejarse por separado del trabajo de monitoreo permanente de derechos humanos. Las susceptibilidades que genera este último tema salieron a la luz cuando el gobierno expulsó a la misión de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH) dos días después de la publicación de un informe de la ONU sobre violaciones de los derechos humanos¹⁰⁹.

Ortega ha indicado que el Sistema para la Integración Centroamericana (SICA) podría ser otro posible intermediario¹¹⁰. Su secretario general, el ex presidente de Guatemala Vinicio Cerezo, es un antiguo amigo del presidente de Nicaragua. “El último recurso de Ortega es Vinicio Cerezo y el SICA. Ortega le agarra el teléfono [si llama Cerezo], y ahora aún más. Cerezo es uno de los pocos dispuestos a escuchar las quejas de Ortega”, dijo un ex diplomático nicaragüense¹¹¹. No obstante, Cerezo es también un centrista que no debe lealtad a los sandinistas. Podría desempeñar algún papel de mediación apoyando los esfuerzos de la ONU, basado más en su conexión personal con Ortega que en la capacidad institucional del SICA, el cual tiene escaso poder sobre sus miembros y cuya experiencia en el abordaje de crisis regionales es limitada¹¹².

Ortega ha rechazado públicamente los esfuerzos diplomáticos de la UE y la OEA para presionar por el diálogo, calificándolos de “intervencionistas”¹¹³. Su actitud hacia la OEA se debe en gran medida a la votación del Consejo Permanente en contra de las acciones de su gobierno en julio, cuando una clara mayoría de países latinoamericanos condenaron la violencia del gobierno contra los manifestantes, apoyaron el diálogo y reclamaron reformas democráticas y de derechos humanos para prevenir nuevas masacres¹¹⁴. No obstante, dada su fuerte presencia en Nicaragua, la ONU debería coordinar con ambos organismos las cuestiones relativas a la mediación y las iniciativas de reforma. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA sigue siendo fundamental no solo en cuanto al monitoreo de los derechos humanos,

¹⁰⁸ “Ortega acusa a PNUD de ‘injerencia política’”, Confidencial, 16 de febrero de 2016.

¹⁰⁹ “Ortega llama ‘instrumento de terror’ a la ONU”, *El Nuevo Diario*, 30 de agosto de 2018.

¹¹⁰ El SICA es una organización centroamericana fundada en 1991 para promover la integración económica en la región. Página web oficial del SICA: www.sica.int

¹¹¹ Entrevista de Crisis Group, ex diplomático nicaragüense, Managua, 4 de septiembre de 2018.

¹¹² Algunos líderes opositores manifestaron su preocupación de que el SICA sea una opción maleable que podría favorecer los intereses de Ortega en un futuro diálogo. Hasta ahora, el SICA no ha condenado la represión en Nicaragua. Entrevista de Crisis Group, ex diplomático, Managua, 4 de septiembre de 2018. “Declaración especial sobre Nicaragua”, LI reunión ordinaria de jefes de estado y de gobierno de los países miembros del SICA, 30 de julio de 2018.

¹¹³ “Daniel Ortega acusa a EE.UU., OEA y UE de ‘intervencionismo’”, *Deutsche Welle*, 9 de noviembre de 2018.

¹¹⁴ La resolución fue aprobada por una mayoría de 21 votos de los 34 miembros del Consejo Permanente. Solo tres países votaron en contra: Venezuela, San Vicente y las Granadinas, y la propia Nicaragua. Siete se abstuvieron, mientras que tres se ausentaron, incluida Bolivia. “La situación en Nicaragua”, Organización de Estados Americanos CP/RES. 1108, 18 de julio de 2018. Para más sobre la respuesta regional a la crisis de Nicaragua, véase: “Resolución sobre Nicaragua”, Foro de São Paulo, 1 de agosto de 2018. “La división de la izquierda latinoamericana frente a Nicaragua”, *The New York Times*, 19 de agosto de 2018.

sino también para mantener la comunicación entre la oposición y los actores internacionales. Por su parte, la UE goza de vínculos diplomáticos y financieros de larga data con el gobierno, y debería continuar ofreciendo apoyo técnico a las reformas, al igual que los Estados europeos, en especial España y Alemania, los cuales se han ofrecido para mediar durante la crisis¹¹⁵.

Junto con los esfuerzos de mediación, EE.UU. impuso sanciones contra Nicaragua tras la violenta represión¹¹⁶. En julio de 2018, el Senado estadounidense presentó el “proyecto de Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción en Nicaragua”, que fue aprobada por el Congreso el 11 de diciembre y otorgaría al presidente Donald Trump facultades para imponer sanciones financieras contra funcionarios nicaragüenses acusados de abusos de los derechos humanos y corrupción. Este proyecto de ley era una nueva versión del proyecto de ley conocido como “Nica Act”, concebido originalmente como una medida para disuadir a Ortega de apropiarse de aún más poder y socavar la democracia¹¹⁷. En base a la existente Ley Global Magnitsky, el 5 de julio se ordenó una primera ronda de sanciones contra tres funcionarios del círculo íntimo de Ortega¹¹⁸. El presidente Trump procedió a firmar una nueva Orden Ejecutiva el 27 de noviembre que el Tesoro estadounidense usó para sancionar a la vicepresidenta Murillo y uno de sus asesores, acusándola de corrupción y abusos de los derechos humanos¹¹⁹.

Es discutible si estas sanciones afectarán o no las decisiones del gobierno, especialmente dado que no le exigen nada en concreto ni incluyen condiciones claras sobre qué tendría que ocurrir para que se levantaran. Además, alimentan la retórica antiimperialista del FSLN y su insistencia en que EE.UU. es “un conspirador” que está detrás del levantamiento, una acusación que tiene sus raíces en el largo historial de intervención estadounidense en Nicaragua. El asesor de Seguridad Nacional de EE.UU. John Bolton contribuyó a reforzar estas ideas con su reciente clasificación de Nicaragua junto con Cuba y Venezuela como parte de la “troika de la tiranía” que enfrentaría sanciones más severas y mayor presión diplomática de EE.UU. hasta que

¹¹⁵ Para la respuesta de la UE, véase: “EU deplors ongoing violence in Nicaragua and calls for peaceful and democratic solution”, comunicado de prensa, 17 de julio de 2018.

¹¹⁶ EE.UU. convocó una reunión del Consejo de Seguridad para debatir la crisis del país a principios de septiembre. También respaldó los esfuerzos de mediación de alto nivel en junio en los que participaron Ortega y Murillo. Mientras, altos diplomáticos estadounidenses admiten que su reticencia a apoyar esfuerzos adicionales para derrocar al presidente o forzar unas elecciones anticipadas se debe a la debilidad y fragmentación de la oposición. Entrevista telefónica de Crisis Group, funcionario estadounidense, 31 de agosto de 2018; entrevista de Crisis Group, diplomático estadounidense, 9 de octubre de 2018.

¹¹⁷ “Nica-US relations in the era of Trump”, *Revista Envío*, No. 425, febrero de 2017.

¹¹⁸ El 5 de julio, el presidente estadounidense impuso sanciones contra Francisco Díaz, un subdirector de la fuerza policial nacional; Fidel Antonio Moreno Briones, el secretario de la Alcaldía de Managua; y Francisco López, el tesorero y vicepresidente de Albanisa. “Treasury Sanctions Three Nicaraguan Individuals for Serious Human Rights Abuse and Corrupt Acts”, Departamento del Tesoro de EE.UU., comunicado de prensa, 5 de julio de 2018.

¹¹⁹ Las sanciones contra Murillo y su asesor de seguridad Néstor Moncada Lau congelan todas sus propiedades bajo jurisdicción estadounidense y prohíbe a las empresas e individuos estadounidenses llevar a cabo transacciones con ellos. “U.S. sanctions Nicaraguan officials, including Ortega's wife”, Reuters, 27 de noviembre de 2018.

caigan sus gobiernos¹²⁰. Tal como están las cosas, la presión que el gobierno está ejerciendo sobre el sector empresarial sugiere que Ortega está dispuesto a arriesgarse a provocar una disminución del crecimiento a cambio de intimidar a sus opositores y evitar hacer concesiones que debilitarían su mando. El FSLN podría incluso beneficiarse de un súbito deterioro del nivel de vida, dado que esto incrementaría la dependencia de los nicaragüenses de los subsidios del gobierno y le permitiría culpar a los golpistas “imperialistas” de la situación del país.

El gobierno también podría aliviar la presión de las sanciones reforzando sus vínculos con Rusia y China. Esta última ha intensificado sus lazos comerciales con Nicaragua en los últimos años, convirtiéndose en el segundo importador de las exportaciones del país después de EE.UU. a pesar de la postergación de los planes para construir un canal interoceánico¹²¹. El interés de China en Nicaragua podría estar relacionado en parte con sus esfuerzos por convencer a Ortega de que retire su reconocimiento de Taiwán – como ya lo hicieron El Salvador en 2018 y Panamá en 2017, aunque Managua aún no ha seguido su ejemplo¹²². Nicaragua también ha adquirido equipamiento militar de Rusia en los últimos años, incluidos 50 tanques T-72 y un número desconocido de aviones de entrenamiento y combate Yak-130. Los rusos han construido un gran complejo para su embajada en Managua, así como un centro para la cooperación en operaciones antinarcóticos, aunque fuentes diplomáticas especulan que las instalaciones están siendo usadas como estación de escucha¹²³.

Lejos de empujar a Ortega hacia un acuerdo con la oposición, las sanciones punitivas hasta ahora han servido para inflamar su retórica antiimperialista. Las sanciones podrían formar parte de la futura presión internacional sobre su gobierno, sobre todo para disuadir al gobierno del uso de la violencia letal contra manifestantes y opositores, siempre y cuando estas medidas busquen garantizar concesiones concretas, gocen de un amplio respaldo de los países latinoamericanos, e incluyan condiciones claras sobre qué tendría que ocurrir para que se levantaran.

C. Reforma electoral

En vista de la violenta represión de los manifestantes y el restablecimiento del control del gobierno, es difícil imaginar que Ortega acepte celebrar elecciones anticipadas, una de las demandas centrales del movimiento de protesta que el secretario general

¹²⁰ Bolton usó esta expresión en un discurso pronunciado el 2 de noviembre. “Troika of Tyranny: Trump White House announces tough new policies against Venezuela, Cuba and Nicaragua”, *The Independent*, 2 de noviembre de 2018.

¹²¹ “Claves que hicieron sucumbir al gran canal de Nicaragua”, *Estrategia y Negocios*, 18 de junio de 2018.

¹²² Entrevista de Crisis Group, ex diplomático nicaragüense, Managua, 4 de septiembre de 2018. “Estadísticas por Mercados de Destino Enero a Septiembre 2017-2018”, Centro de Trámites de las Exportaciones, 2018. “¿Por qué en plena crisis Taiwán le tiende la mano a Daniel Ortega?”, *La Prensa*, 10 de octubre de 2018. “El Salvador Recognizes China in Blow to Taiwan”, *The New York Times*, 21 de agosto de 2018.

¹²³ Entrevistas de Crisis Group, Managua, 4-6 de septiembre de 2018. “Tanques, aviones y un centro de espionaje: la Nicaragua rusa que inquieta a EEUU”, *Confidencial*, 10 de julio de 2017. “The Soviet Union fought the Cold War in Nicaragua. Now Putin’s Russia is back”, *The Washington Post*, 8 de abril de 2017.

de la OEA Luis Almagro también respaldó en julio¹²⁴. Incluso si se cumpliera, esta demanda podría resultar contraproducente para la oposición, ya que unos comicios anticipados organizados por militantes del FSLN probablemente beneficiarían al partido gobernante. La oposición haría mejor en centrarse en obtener reformas que garanticen que las próximas elecciones presidenciales, actualmente previstas para 2021, reflejen de manera equitativa las decisiones del electorado. Las iniciativas de reforma electoral no son una novedad en Nicaragua, y recientemente incluso gozaron de un tibio apoyo por parte de Ortega. En octubre de 2016, la OEA logró la aprobación de Ortega para fortalecer las instituciones electorales del país, aunque para mediados de 2017 la iniciativa había sido abandonada, según diplomáticos en Managua, principalmente debido a que el gobierno no cumplió sus promesas iniciales.¹²⁵

En conjunto, los anteriores esfuerzos de reforma de la OEA en Nicaragua y las recomendaciones de las misiones de observación electoral tanto de la OEA como de la UE constituyen un conjunto de reformas que podrían ayudar a asegurar que las próximas elecciones en Nicaragua sean razonablemente creíbles a ojos de todos los candidatos. Toda nueva legislación sobre partidos políticos debería reforzar los derechos de los mismos frente a las instituciones dominadas por el FSLN reformando el Consejo Supremo Electoral y estableciendo protocolos de selección de magistrados más estrictos para garantizar su independencia. Asimismo, será necesario simplificar la inscripción y participación de nuevos partidos y crear nuevos reglamentos para supervisar el financiamiento político. También se debería dar prioridad a garantizar que los escaños de cada distrito electoral en la Asamblea Nacional sean asignados equitativamente y a modernizar el registro de votantes¹²⁶.

Si bien Ortega parece tener escasos incentivos para negociar, un programa de reformas electorales concretas no amenazaría inminentemente su control del poder. En la práctica significaría comprometerse a llevar a cabo reformas que su gobierno ya había acordado durante los esfuerzos liderados por la OEA en 2016-2017. Esto presenta una oportunidad para modernizar las instituciones electorales del país con

¹²⁴ Véase el discurso de Luis Almagro, “La solución está en medir posiciones en las urnas, no con armas ni con represión”, Revista Envío, agosto de 2018.

¹²⁵ En el marco de las elecciones de 2016, el 14 de octubre de 2016 el secretario general de la OEA Luis Almagro envió una carta a Ortega en la que expresaba su preocupación por el proceso electoral y ofrecía iniciar un diálogo sobre el fortalecimiento de las instituciones democráticas de Nicaragua. El 28 de febrero de 2017, la OEA firmó un memorando con el gobierno que incluía una misión de observación electoral para las elecciones municipales de noviembre de 2017 y apoyo técnico sobre legislación electoral. Durante el Diálogo Nacional, la OEA intentó revivir este esfuerzo proponiendo un cronograma de reformas en junio de 2018, que nunca fue finalizado debido al colapso de las negociaciones. Entrevista de Crisis Group, diplomático, Managua, 6 de septiembre de 2018. “Cronograma proyecto Fortalecimiento de las Instituciones Democráticas en Nicaragua”, comunicado de la OEA, 1 de junio de 2018. Para los antecedentes de las recientes iniciativas de reforma de la OEA, véase: “Comunicado de la Secretaría General sobre el proceso electoral en Nicaragua”, comunicado de la OEA, 16 de octubre de 2016; “Memorándum de entendimiento entre la Secretaría General de la OEA y el Gobierno de la República de Nicaragua”, 28 de febrero de 2018; y “Ortega le saca tres años a la OEA”, *La Prensa*, 21 de enero de 2018.

¹²⁶ Se puede consultar una serie de recomendaciones político-electorales más detalladas en: “OAS Electoral support mission in Nicaragua municipal elections: Final report”, 5 de noviembre de 2017, y “Nicaragua, Final Report: EU Electoral Observation Mission, General Elections and the Parlacen 2011”.

apoyo internacional, posiblemente incluso antes de las elecciones regionales previstas para marzo de 2019. Casi sin ninguna duda, el FSLN sigue siendo el partido político más popular en Nicaragua, de modo que un Consejo Supremo Electoral fortalecido no necesariamente echaría por tierra las posibilidades de los sandinistas de ganar las próximas elecciones generales. De hecho, podría incluso legitimar dicha victoria a ojos de los nicaragüenses y las potencias extranjeras. Plenamente consciente de los efectos perjudiciales de la represión sobre la reputación internacional de Nicaragua, Ortega concedió un número sin precedentes de entrevistas a los medios desde julio de 2018, en las que procuró refutar la versión de los hechos de los manifestantes¹²⁷. Si aceptara estas reformas, Ortega disminuiría además su creciente aislamiento en América Latina, el cual demostró de manera drástica la votación de la OEA en julio.

Dichas reformas no abordarían la causa original de la crisis – la propuesta de cambios a la institución de seguridad social del país, para lo cual es fundamental que el gobierno reconstruya las relaciones de trabajo con el sector privado. Tampoco sanarían las heridas que ha dejado la violencia desatada contra los manifestantes. Pero al menos abordarían el resentimiento generado por el cierre de los espacios democráticos en el país. Idealmente generarían confianza y sentarían las bases de un nuevo diálogo entre el gobierno y la oposición. No obstante, si las hostilidades políticas impidieran la reanudación de las negociaciones y las reformas siguieran adelante, los organismos internacionales que apoyan los cambios al sistema electoral, en especial la UE y la OEA, deberían al menos establecer canales y plataformas para que la oposición y la sociedad civil puedan expresar sus opiniones, y aportar ideas al proceso.

El impacto a largo plazo de tales reformas dependerá de las decisiones estratégicas de la Alianza Cívica y el movimiento más amplio de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Si eligieran convertirse en un movimiento civil, su objetivo debería ser transformar los partidos políticos opositores, actualmente desprestigiados, en vehículos para sus objetivos políticos. En este sentido, valdría la pena emular ciertos casos regionales, como la Asamblea de la Sociedad Civil en Guatemala durante las negociaciones de paz del país en los 90, que funcionó con el apoyo y asesoramiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos¹²⁸. Si los grupos manifestantes decidieran convertirse en partido político o coalición, tendrían que establecer una clara estructura de liderazgo y lograr un mayor grado de unidad y capacidad de hacer campaña, y una estrategia coherente de cara a las próximas elecciones.

D. *Justicia y derechos humanos*

Si bien el gobierno considera que la represión de las protestas fue una respuesta legítima a un intento golpista fallido, la evidencia sugiere que las fuerzas de seguridad sandinistas cometieron graves violaciones de los derechos humanos. Aunque no haya negociaciones directas entre el gobierno y la oposición, las potencias extranjeras y los organismos internacionales – sobre todo las naciones latinoamericanas, EE.UU.,

¹²⁷ “Ortega niega la represión y culpa a EE.UU.”, op. cit.

¹²⁸ La Asamblea de la Sociedad Civil de Guatemala fue creada en 1994 para elaborar recomendaciones no vinculantes sobre cuestiones específicas de las negociaciones para poner fin al conflicto armado en 1996. Para su papel, véase: “The Civil Society Assembly: Shaping agreement”, Conciliation Resources, 2002.

la UE y el Vaticano – deberían seguir insistiendo que Ortega respete un umbral mínimo de derechos humanos en cualquier futuro control policial de las protestas e intento de procesar a los manifestantes.

Cualquier futuro intento de monitorear y contener las manifestaciones debería tener en cuenta las recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos en relación al uso de la fuerza durante las marchas¹²⁹. Aparte de los tranques, la mayoría de las protestas han sido manifestaciones no violentas de ciudadanos nicaragüenses reclamando reformas democráticas. Siempre y cuando las marchas sigan siendo pacíficas, se debería permitir a los ciudadanos manifestarse sin enfrentar abusos y violencia. También deberían ser libres de exigir cambios políticos, decidir sobre su liderazgo y fomentar el intercambio de ideas sin riesgo de ser procesados o sufrir daños físicos.

Es casi seguro que la oposición exigirá la liberación de los presos políticos como condición previa para participar en cualquier diálogo¹³⁰. Esta no es una concesión que el FSLN vaya a aceptar de buena gana. No obstante, un gesto mínimo como publicar un listado exhaustivo de los nombres y ubicación de los manifestantes encarcelados, que podría ser verificado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos junto con organismos de derechos humanos locales, podría resultar menos problemático para el gobierno y no comprometería su política de contención de la revuelta.¹³¹ Lo que es más importante, ayudaría a aliviar el dolor innecesario de las familias que buscan a sus familiares detenidos, y dejaría en claro cuántos presos quedan por liberar de cara a unas futuras negociaciones. Asimismo, el gobierno debería permitir el escrutinio público de los juicios y garantizar el debido proceso de los manifestantes detenidos.

Las reformas más ambiciosas del sector judicial y los derechos humanos deberían esperar a la próxima Asamblea Nacional, cuya elección también está prevista para 2021. Cualquier futura iniciativa debería basarse en las propuestas del Diálogo Nacional, y ser uno de los principales temas de debate de las negociaciones antes de dichos comicios. Dichos temas incluyen la selección de jefes independientes para las principales instituciones judiciales del país, la reforma de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos para garantizar que ofrezca una supervisión eficaz, y la selección de mecanismos de justicia transicional para lidiar con los delitos cometidos tanto por el gobierno como por los simpatizantes de la oposición durante la revuelta.

¹²⁹ Véanse recomendaciones “Violaciones de Derechos Humanos y abusos en el contexto de las protestas”, op. cit., p. 39.

¹³⁰ Entrevista telefónica de Crisis Group, diplomático, 3 de octubre de 2018.

¹³¹ La CIDH fue expulsada del país el 19 de diciembre, pocas horas después de la publicación en inglés del este informe.

V. Conclusión

Hasta ahora, el gobierno de Nicaragua ha podido contener el movimiento de protesta que surgió inesperadamente en abril mediante la violencia y un sistema judicial politizado. Pero el rápido deterioro del apoyo al presidente Ortega, el creciente resentimiento contra él y el marcado deterioro económico podrían desencadenar nuevos disturbios. Al mismo tiempo, la respuesta de Nicaragua a la crisis la ha sumido en un aislamiento evidente.

Los críticos del presidente insisten en que su gobierno ha perdido legitimidad y aliados dentro y fuera de Nicaragua, lo cual es cierto. No obstante, afirmar que su caída es inevitable e incluso inminente parece exagerado. El gobierno tiene la situación firmemente bajo control y está aparentemente convencido de que se enfrenta a una conspiración. Su poder coercitivo a nivel de fuerzas es claramente superior al de la oposición, lo cual juega en contra de cualquier concesión que pueda hacer a un movimiento de protesta al cual desprecia y considera criminal y terrorista. El diálogo entre ambas partes es fundamental para evitar futuras revueltas, pero la fragmentación de los manifestantes y la oposición, así como la obstinación del gobierno, por ahora dificultan las condiciones para la negociación.

No obstante, los gobiernos extranjeros y los organismos internacionales, sobre todo los países miembros de la OEA y el Sistema para la Integración Centroamericana, así como EE.UU., la UE y el Vaticano, deberían procurar abrir canales de comunicación discretos con el gobierno para crear las condiciones necesarias para la reanudación de las negociaciones y ayudar a establecer un formato para el diálogo. Deberían alentar al gobierno a cooperar con organizaciones de derechos humanos publicando una lista de manifestantes detenidos y garantizando su debido proceso.¹³² Las reformas electorales a las que el gobierno ya ha accedido permitirían que las próximas elecciones presidenciales previstas para 2021, para las cuales la oposición y los manifestantes deberían empezar a prepararse a fondo, sean más equitativas. Ninguna de estas medidas amenazaría el control del poder del gobierno, pero sí indicarían su voluntad de comprometerse y poner freno a los abusos más graves de las autoridades estatales y judiciales; la flexibilidad en torno a estas cuestiones debería ayudar a allanar el camino para la plena reanudación de las negociaciones, que deberían además centrarse en la reforma judicial y en obligar a rendir cuentas a los responsables de la violencia cometida durante la crisis.

Tal vez el gobierno nicaragüense no sea el más transparente o accesible de la región, pero no hay duda de que está alarmado por la magnitud de la revuelta de este año y el impacto en su imagen internacional. Su retórica antiimperialista podrá asemejarse a los discursos de agitadores líderes bolivarianos como el presidente de Venezuela Nicolás Maduro, pero Ortega abrió la puerta al diálogo con EE.UU. en pleno auge del movimiento de protesta¹³³. La historia política de los sandinistas está

¹³² Esta frase se ha modificado en la versión traducida al español del informe después de la expulsión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del país el 19 de diciembre de 2018.

¹³³ Las diferencias entre Nicaragua y Venezuela son significativas. La economía del país centroamericano es 30 veces menor que la de Venezuela. Nicaragua no puede vivir de las materias primas ni de las reservas de divisas extranjeras, que han disminuido en casi un 20 por ciento desde el comienzo de la crisis. El ejército nicaragüense, si bien es leal al gobierno, tiene otros intereses y supuesta-

repleta de precedentes de concesiones a sus antiguos enemigos para garantizar su supervivencia. Por el bien del país y de su propio futuro político, Ortega debería hacer lo mismo con sus compatriotas que se oponen vehementemente a su mando.

Ciudad de Guatemala/Bogotá/Bruselas, 19 de diciembre de 2018

mente no está involucrado en actividades económicas ilegales. Para más de Crisis Group sobre Venezuela, véase: “Poder sin el pueblo: evitando el colapso de Venezuela”, Informe Breve sobre América Latina No. 36, 19 de julio de 2017 y “Venezuela: la deuda del hambre”, Informe Breve sobre América Latina No. 37, 23 de noviembre de 2017.

Anexo A: Mapa de América Central

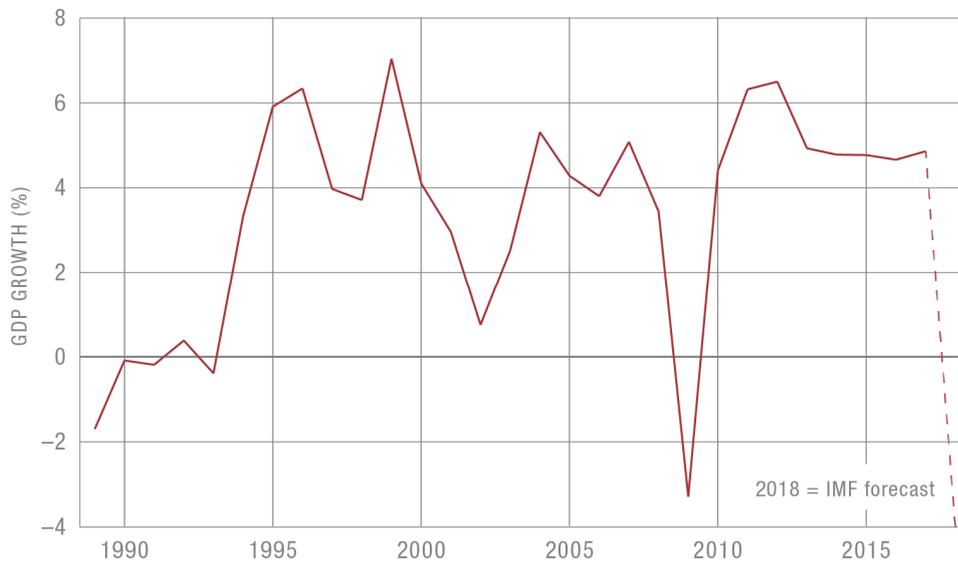


Anexo B: Mapa de Nicaragua



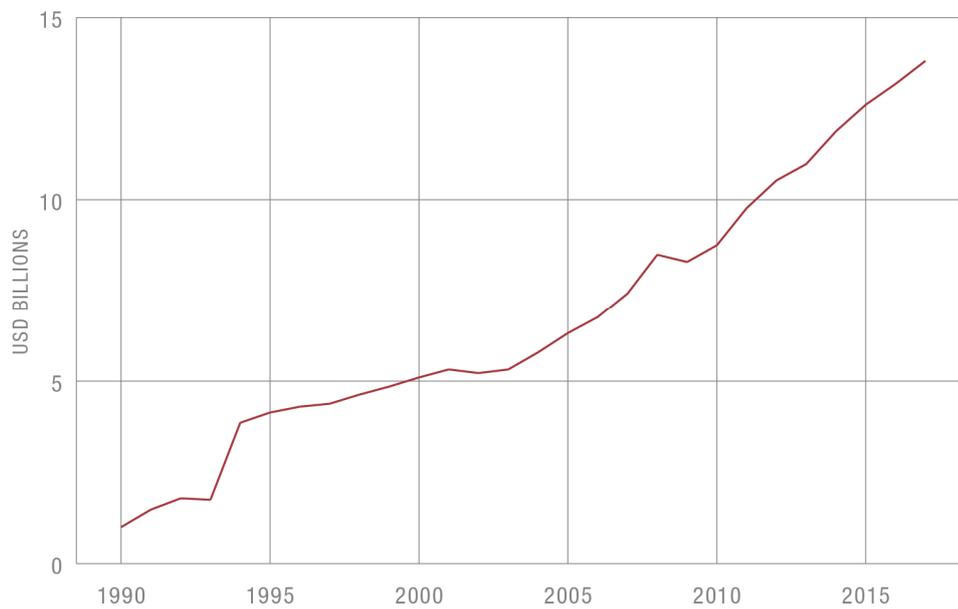
Anexo C: Economía de Nicaragua

Crecimiento del PIB 1990-2018 (%)



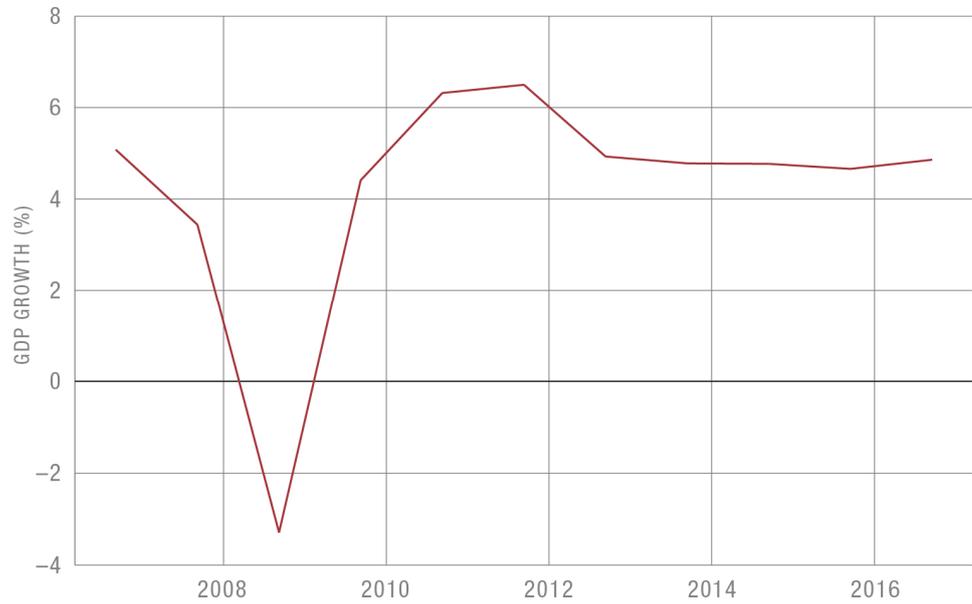
Fuente: FMI y Banco Mundial

Crecimiento del PIB 1990-2017, USD



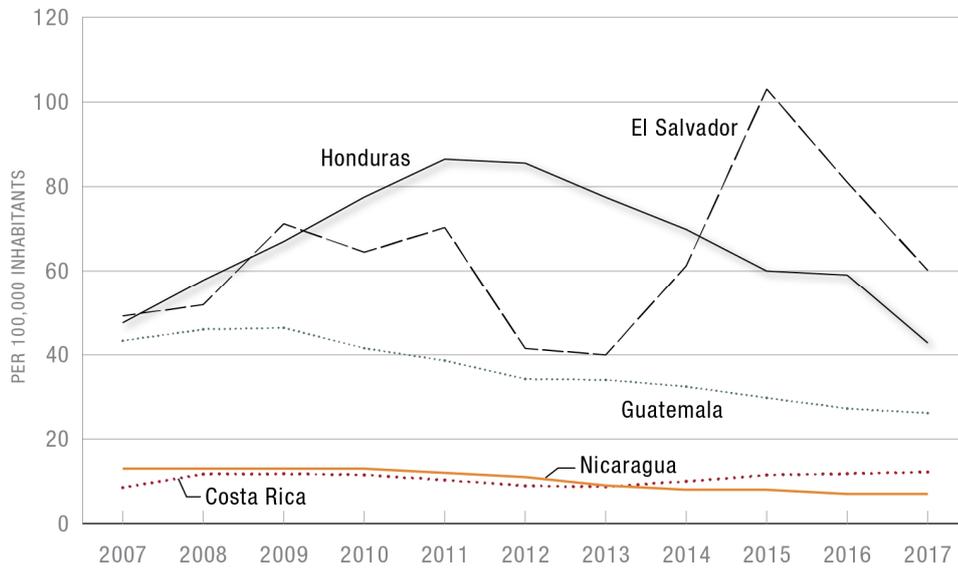
Fuente: FMI y Banco Mundial

Desempeño económico desde el retorno de Ortega (2007-2017)



Fuente: FMI y Banco Mundial

Anexo D: Tasas de homicidios en países de América Central



Fuentes: Policía Nacional de Nicaragua, Estadísticas anuales, 2007-2017 (por año); Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, Dirección de Información y Análisis, Número total de homicidios 2007-2017 (por año); Secretaría de Seguridad de la Policía Nacional de Honduras, Departamento de estadísticas – Dirección de planeación, procedimientos operativos y mejoramiento continuo, diciembre 2018; Trino del Ministerio de Gobernación de Guatemala, "Comparación histórica de homicidios por 100 000 habitantes", 31 de agosto de 2018; Viceministerio de Paz de Costa Rica, Observatorio de Violencia, Tablas y cuadros.

Anexo E: Financiamiento de Venezuela para el desarrollo en Nicaragua

Financiamiento venezolano para el desarrollo de Nicaragua como parte de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) – en millones de dólares

Año	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018*
Total	457.0	490.9	532.8	577.2	729.3	654.2	686.0	368.1	248.6	102.4	9.2

* Primer semestre

Fuente: "Informe de Cooperación Externa", Banco Central de Nicaragua, Octubre de 2018.

Anexo F: Acerca de International Crisis Group

El International Crisis Group (Crisis Group) es una organización no gubernamental independiente sin ánimo de lucro, con cerca de 120 funcionarios en cinco continentes, que combina el análisis sobre el terreno con labores de sensibilización al más alto nivel, con el objetivo de prevenir y solucionar conflictos graves.

El trabajo de Crisis Group se basa en investigaciones realizadas sobre el terreno. Cuenta con equipos de analistas políticos con sede en o cerca de los países en riesgo de crisis, escalada o recurrencia de conflictos violentos. Con base en la información y las evaluaciones sobre el terreno, produce informes analíticos con recomendaciones prácticas dirigidas a quienes toman decisiones fundamentales en el ámbito internacional. Crisis Group también publica *CrisisWatch*, un boletín mensual de alerta temprana, que actualiza sucintamente y con regularidad la coyuntura en más de 70 situaciones de conflicto o conflicto potencial alrededor del mundo.

Los informes y los informes breves de Crisis Group son ampliamente distribuidos por correo electrónico y se publican simultáneamente en el sitio web de la organización, www.crisisgroup.org. Crisis Group trabaja en estrecha colaboración con gobiernos y con grupos influyentes, incluidos los medios, para llamar la atención sobre sus análisis de crisis y buscar apoyo para sus recomendaciones en material de políticas.

El Consejo de Administración de Crisis Group –cuyos miembros incluyen figuras prominentes en las esferas de la política, la diplomacia, los negocios y los medios de comunicación– participa de forma directa en la promoción de los informes y recomendaciones de la organización, buscando su consideración por parte de formuladores de políticas en el mundo. Crisis Group es dirigido por el ex Subsecretario General de las Naciones Unidas y ex Administrador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Lord (Mark) Malloch-Brown.

El Presidente y Director Ejecutivo de Crisis Group, Robert Malley, asumió el cargo el 1 de enero de 2018. Malley fue Director del Programa de Crisis Group para Oriente Medio y Norte de África y más recientemente fue Asistente Especial del ex presidente de los Estados Unidos Barack Obama al igual que Asesor Senior del Presidente para la Campaña contra ISIS, y Coordinador de la Casa Blanca para el Oriente Medio, Norte de África y la región del Golfo. Previamente, se desempeñó como Asistente Especial del presidente Bill Clinton para los asuntos Israelí-Palestinos.

La sede internacional de Crisis Group se encuentra en Bruselas, y la organización cuenta con oficinas o representación en siete localidades: Bogotá, Dakar, Estambul, Nairobi, Londres, Nueva York, y Washington, DC. También tiene representación de personal en las siguientes ciudades: Abuja, Argel, Bangkok, Beirut, Caracas, Ciudad de Gaza, Ciudad de Guatemala, Ciudad de México, Hong Kong, Jerusalén, Johannesburgo, Juba, Nueva Delhi, Rabat, Rangún, Tiflis, Toronto, Trípoli y Túnez.

Crisis Group recibe apoyo financiero de una amplia gama de gobiernos, fundaciones y fuentes privadas. En la actualidad Crisis Group tiene relaciones con los siguientes departamentos y organismos gubernamentales: Agencia Austriaca para el Desarrollo, Asuntos Globales de Canadá, Cooperación Irlandesa para el Desarrollo, Departamento Australiano para los Asuntos Internacionales y el Comercio, Instrumento para la Estabilidad y la Paz de la Unión Europea (IcSP), Ministerio de Asuntos Exteriores de Dinamarca, Ministerio de Relaciones Exteriores de Emiratos Árabes, Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia, Agencia Francesa para el Desarrollo, Ministerio para Europa y las Relaciones Exteriores de Francia, Ministerio de Relaciones Exteriores de Islandia, Agencia Internacional de Cooperación de Japón, Ministerio de Relaciones Exteriores de Liechtenstein, Ministerio de Relaciones Exteriores de Luxemburgo, Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega, Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio de Nueva Zelanda, Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar, Ministerio de Relaciones Exteriores de Suecia y Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Suiza.

Crisis Group también mantiene relaciones con las siguientes fundaciones: Carnegie Corporation of New York, Elders Foundation, Henry Luce Foundation, John D. and Catherine T. MacArthur Foundation, Korea Foundation, Oak Foundation, Open Society Foundations, Ploughshares Fund, Robert Bosch Stiftung, Rockefeller Brothers Fund, UniKorea Foundation y WellSpring Philanthropic Fund.

Anexo G: Informes e informes breves sobre América Latina desde 2015

Informes especiales

Exploiting Disorder: al-Qaeda and the Islamic State, Informe especial N°1, 14 de marzo de 2016 (también disponible en árabe y francés).

Seizing the Moment: From Early Warning to Early Action, Informe especial N°2, 22 de junio de 2016.

Counter-terrorism Pitfalls: What the U.S. Fight against ISIS and al-Qaeda Should Avoid, Informe especial N°3, 22 de marzo de 2017.

Ciudad Juárez: ¿Transitando del abismo a la redención?, Informe sobre América Latina N°54, 25 de febrero de 2015.

En la cuerda floja: la fase final de las conversaciones de paz en Colombia, Informe breve sobre América Latina N°32, 2 de julio de 2015.

Venezuela: un desastre evitable, Informe breve sobre América Latina N°33, 30 de julio de 2015.

Justicia denegada: desaparecidos en Guerrero, México, Informe sobre América Latina N°55, 23 de octubre de 2015.

Fin de la hegemonía: ¿Qué sigue para Venezuela?, Informe breve sobre América Latina N°34, 21 de diciembre de 2015.

¿De bastón a catalizador?: la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Informe sobre América Latina N° 56, 29 de enero de 2016.

Venezuela: al borde del precipicio, Informe breve sobre América Latina N°35, 23 de junio de 2016.

Presas fáciles: violencia criminal y migración en Centroamérica, Informe de Crisis Group sobre América Latina N°57, 28 de julio de 2016.

Últimos pasos hacia el fin de la guerra en Colombia, Informe sobre América Latina N°58, 7 de septiembre de 2016.

Venezuela: diálogo a duras penas, Informe sobre América Latina N°59, 16 de diciembre de 2016.

Bajo la sombra del "no": la paz en Colombia después del plebiscito, Informe sobre América Latina N°60, 31 de enero de 2017.

Veracruz: reparar el estado de terror de México, Informe sobre América Latina N°61, 28 de febrero de 2017.

El salario del miedo: maras, violencia y extorsiones en América Central, Informe sobre América Latina N°62, 6 de abril de 2017.

Poder sin el pueblo: evitando el colapso de Venezuela, Informe breve sobre América Latina N°36, 19 de junio de 2017.

Los grupos armados de Colombia y su disputa por el botín de la paz, Informe sobre América Latina N°63, 19 de octubre de 2017.

Venezuela: la deuda del hambre, Informe breve sobre América Latina N°37, 23 de noviembre de 2017.

Política y violencia perpetua en El Salvador, Informe sobre América Latina N°64, 19 de diciembre 2017.

Cómo detener la onda expansiva de la crisis en Venezuela, Informe sobre América Latina N°65, 21 de marzo de 2018.

La frontera sur de México: seguridad, violencia y migración en la era Trump, Informe sobre América Latina N°66, 9 de mayo de 2018.

Reformas arriesgadas: el enfoque del gobierno de Duque hacia la paz en Colombia, Informe de Crisis Group sobre América Latina N°67, 21 de junio de 2018.

La paz que falta: el nuevo gobierno de Colombia y la última de sus guerrillas, Informe de Crisis Group sobre América Latina N° 68, 12 de julio de 2018.

Construcción de paz en México: los dilemas de seguridad que enfrenta el gobierno de López Obrador, Informe sobre América Latina N°69, 11 de octubre de 2018.

Rescatando la lucha de Guatemala contra el crimen y la impunidad, Informe de Crisis Group sobre América Latina N°70, 24 de octubre de 2018

Fuego amigo: el caos de la oposición venezolana, Informe de Crisis Group sobre América Latina N°71, 23 de noviembre de 2018

Anexo H: Consejo de Administración de International Crisis Group

PRESIDENTE DEL CONSEJO**Lord (Mark) Malloch-Brown**

Ex Secretario General Adjunto de las Naciones Unidas y Administrador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

PRESIDENTE Y DIRECTOR EJECUTIVO**Robert Malley**

Ex Coordinador de la Casa Blanca para el Medio oriente, Norte de África y la región del Golfo

OTROS MIEMBROS DEL CONSEJO**Fola Adeola**

Fundador y presidente, FATE Foundation

Hushang Ansary

Presidente, Parman Capital Group LLC; Ex Embajador de Irán en EE.UU. y Ministro de Finanzas y Asuntos Económicos

Carl Bildt

Ex Primer Ministro y Ministro de Relaciones Exteriores de Suecia

Emma Bonino

Ex Ministra de Relaciones Exteriores de Italia; Ex Comisionada Europea para la Ayuda Humanitaria

Cheryl Carolus

Ex Alta Comisionada de Sudáfrica ante el Reino Unido; ex Secretaria General del Congreso Nacional Africano (ANC)

Maria Livanos Cattau

Ex Secretaria General de la Cámara Internacional de Comercio

Nathalie Delapalme

Directora ejecutiva y miembro de la Junta Directiva de Mo Ibrahim Foundation

Alexander Downer

Ex ministro de Asuntos Exteriores y Alto Comisionado ante el Reino Unido de Australia

Sigmar Gabriel

Ex ministro de Asuntos Exteriores y Vice Canciller de Alemania

Robert Fadel

Ex miembro del Parlamento de Líbano; Presidente y Director Ejecutivo de ABC Group

Frank Giustra

Presidente y Director Ejecutivo, Fiore Financial Corporation

Hu Shuli

Editor en jefe de Caixin Media; Profesor en Sun Yat-sen University

Mo Ibrahim

Fundador y Presidente de Mo Ibrahim Foundation; fundador de Celtel International

Yoriko Kawaguchi

Ex Canciller de Japón; Ex ministro de Medio Ambiente

Wadah Khanfar

Cofundador, Al Sharq Forum; ex Director General, Al Jazeera Network

Nasser al-Kidwa

Presidente de Yasser Arafat Foundation; Ex Mediador Adjunto de la ONU sobre Siria

Bert Koenders

Ex Ministro de Relaciones Exteriores de Holanda y Subsecretario General de Naciones Unidas

Andrey Kortunov

Director General del Consejo Ruso de Asuntos Internacionales

Ivan Krastev

Presidente del Centro para Estrategias Liberales (Sofia); miembro fundador de la junta del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores

Ramtame Lamamra

Ex ministro de Asuntos Exteriores de Argelia; Ex Comisionado de Paz y Seguridad, Unión Africana

Tzipi Livni

Ex Canciller y Vice Primer Ministro de Israel

Helge Lund

Ex director ejecutivo de BG Group Limited (GB) y Statoil (Noruega)

William H. McRaven

Almirante retira de la Marina de EE.UU., que sirve como 9° comandante del Comando e Operaciones Especiales de EE.UU.

Shivshankar Menon

Ex Secretario de Exteriores de India; Ex Asesor Nacional de Seguridad

Naz Modirzadeh

Director del programa de Derecho Internacional y Conflicto Armado de la Escuela de Derecho de Harvard

Saad Mohseni

Presidente y Director Ejecutivo de MOBY Group

Marty Natalegawa

Ex Ministro de Asuntos Exteriores de Indonesia; Representante permanente ante la ONU; Ex embajador en Reino Unido

Ayo Obe

Presidente de la junta de Gorée Institute (Senegal); abogada (Nigeria)

Thomas R. Pickering

Ex Embajador de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Rusia, India, Israel, Jordania, El Salvador y Nigeria

Ahmed Rashid

Escritor y periodista de política exterior, Pakistan

Juan Manuel Santos Calderón

Ex Presidente de Colombia, Premio Nobel de Paz 2016

Wendy Sherman

Ex Subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos de EE.UU. y Jefe negociador para el Acuerdo Nuclear con Irán

Ellen Johnson Sirleaf

Ex presidente de Liberia

Alexander Soros

Fundador, Fundación Alexander Soros

George Soros

Fundador, Open Society Foundations y Presidente, Soros Fund Management

Pär Stenbäck

Ex Ministro de Relaciones Exteriores y de Educación, Finlandia. Presidente del Parlamento Cultural Europeo

Jonas Gahr Støre

Líder del Partido Noruego de los Trabajadores, Ex Ministro de Relaciones Exteriores de Noruega

Jake Sullivan

Ex director de Planificación de políticas en el Departamento de Estado de EE. UU., Asistente adjunto del presidente Obama y asesor de seguridad nacional del vicepresidente Biden

Lawrence H. Summers

Ex Director del Consejo Económico Nacional de los EE.UU. y ex Secretario del Tesoro de EEUU; Presidente emérito de la Universidad de Harvard

Helle Thorning-Schmidt

Director Ejecutivo de Save the Children International; Ex Primer Ministro de Dinamarca

Wang Jisi

Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores de China; Presidente, Instituto de Estudios Internacionales y Estratégicos, Peking University

CONSEJO DEL PRESIDENTE

Es un distinguido grupo de donantes particulares y corporativos que brindan apoyo esencial y experticia a Crisis Group.

CORPORATIVO	INDIVIDUAL	
BP	(5) Anónimos	Stephen Robert
Shearman & Sterling LLP	Scott Bessent	Luděk Sekyra
Statoil (U.K.) Ltd.	David Brown & Erika Franke	Alexander Soros
White & Case LLP	Herman De Bode	Ian R. Taylor

CONSEJO ASESOR INTERNACIONAL

Donantes particulares y corporativos que juegan un papel central en los esfuerzos de Crisis Group para prevenir conflictos graves.

CORPORATIVO	INDIVIDUAL	
Anónimo	(3) Anónimos	Faisal Khan
APCO Worldwide Inc.	Mark Bergman	Cleopatra Kitti
Atlas Copco AB	Stanley Bergman & Edward Bergman	Michael & Jackie Lambert
Chevron	David & Katherine Bradley	Samantha Lasry
Edelman UK	Eric Christiansen	Leslie Lishon
Eni	Sam Englehardt	Malcolm Hewitt Wiener Foundation
HSBC Holdings Plc	The Edelman Family Foundation	The New York Community Trust – Lise Strickler & Mark Gallogly Charitable Fund
MetLife	Seth & Jane Ginns	The Nommontu Foundation
Noble Energy	Ronald Glickman	Brian Paes-Braga
RBC Capital Markets	David Harding	Kerry Propper
Shell	Geoffrey R. Hogue & Ana Luisa Ponti	Duco Sickinghe
	Geoffrey Hsu	Nina K. Solarz
	David Jannetti	Clayton E. Swisher
		Enzo Viscusi

CONSEJO EMBAJADOR

Jóvenes talentos de diversos campos que contribuyen con sus habilidades y experticia para apoyar la misión de Crisis Group

Amy Benziger	Lindsay Iversen	Nidhi Sinha
Tripp Callan	Azim Jamal	Chloe Squires
Kivanc Cubukcu	Arohi Jain	Leeanne Su
Matthew Devlin	Christopher Louney	Bobbi Thomason
Victoria Ergolavou	Matthew Magenheim	AJ Twombly
Noa Gafni	Madison Malloch-Brown	Dillon Twombly
Christina Bache	Megan McGill	Annie Verderosa
Lynda Hammes	Hamesh Mehta	Zachary Watling
Jason Hesse	Tara Opalinski	Grant Webster
Dali ten Hove	Perfecto Sanchez	

ASESORES SENIOR

Antiguos miembros del Consejo de Administración que mantienen una relación con Crisis Group y a quienes se recurre ocasionalmente en busca de apoyo y asesoría (en la medida en que sean consistentes con cualquier otro cargo que puedan estar desempeñando en ese momento).

Martti Ahtisaari Presidente Emérito	Lakhdar Brahimi	Joanne Leedom-Ackerman
George Mitchell Presidente Emérito	Kim Campbell	Todung Mulya Lubis
Gareth Evans Presidente Emérito	Jorge Castañeda	Graça Machel
Kenneth Adelman	Joaquim Alberto Chissano	Jessica T. Mathews
Adnan Abu-Odeh	Victor Chu	Miklós Németh
HRH Prince Turki al-Faisal	Mong Joon Chung	Christine Ockrent
Celso Amorim	Sheila Coronel	Timothy Ong
Oscar Arias	Pat Cox	Roza Otunbayeva
Richard Armitage	Gianfranco Dell'Alba	Olara Otunnu
Diego Arria	Jacques Delors	Lord (Christopher) Patten
Zainab Bangura	Alain Destexhe	Surin Pitsuwan
Nahum Barnea	Mou-Shih Ding	Fidel V. Ramos
Kim Beazley	Uffe Ellemann-Jensen	Olympia Snowe
Shlomo Ben-Ami	Stanley Fischer	Javier Solana
Christoph Bertram	Carla Hills	
	Swanee Hunt	
	Wolfgang Ischinger	
	Aleksander Kwasniewski	
	Ricardo Lagos	